

***Cuadernos  
de  
CLASPO- Argentina***

**¿De las acciones de lucha  
a los proyectos productivos?  
La experiencia de la Unión de Trabajadores  
Desocupados de General E. Mosconi  
en la Provincia de Salta**

**SEBASTIÁN PEREYRA**

**19**

**JULIO 2006**

Los *Cuadernos de Claspo-Argentina* tienen como objetivo difundir los resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo en el marco del Grupo de Trabajo sobre Políticas Sociales y Desarrollo Comunitario Auto-sustentable en Perspectiva Comparada.

### Indice

I. Introducción: Reformas económicas y crisis de las economías regionales. Un caso en el norte de la Provincia de Salta, Argentina	3
II. La vida con y sin Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF): del mundo del trabajo y el Estado de bienestar a la crisis y la descolectivización	8
III. Un nuevo actor para la reapropiación de las políticas asistenciales	21
IV. Conclusiones: ¿Existen nuevos horizontes?	32
Anexo I	35
Anexo II	36
Bibliografía	37

---

© CLASPO-Argentina, Buenos Aires, 2006.

Grupo interinstitucional de trabajo entre el Instituto de Desarrollo Económico y Social, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad de San Andrés, mediante un convenio con el Center for Latin American Social Policy (CLASPO), University of Texas at Austin. El Proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Ford.

Equipo Coordinador: Carlos Acuña (UdeSA), Elizabeth Jelin (IDES) y Gabriel Kessler (UNGS).

**Para la reproducción del material deberá citarse la fuente.**

# **¿De las acciones de lucha a los proyectos productivos? La experiencia de la Unión de Trabajadores Desocupados de General E. Mosconi en la Provincia de Salta\***

**SEBASTIÁN PEREYRA**

*“...no te sirve de nada salir en los diarios, discutí lo que realmente pensás, lo que querés que sea, el objetivo que vos tenés. Algunas veces se olvidan del sentido común; tenés que tener el sentido común de las cosas, vos me podés decir que soy un tipo que está ahí y está de aquel lado, ¡no! Yo tengo sentido común, yo sé que a los chicos míos les tengo que dejar algo, sí o sí, porque esto se va a la mierda, porque hay que decir la verdad; entonces, acá en donde yo vivo les tengo que dejar algo. Después, que los golpee otro será otra cosa”. (Entrevista del autor a Hippié, 40 años, referente de la UTD, Mosconi, Salta, agosto de 2002)*

## ***I. Introducción***

### ***Reformas económicas y crisis de las economías regionales. Un caso en el norte de la Provincia de Salta, Argentina***

Durante la década del 90 la sociedad argentina sufrió importantes transformaciones económicas, políticas y sociales. Las reformas implementadas desde comienzos de la década condujeron a una transformación definitiva del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, vigente en el país durante la segunda mitad del siglo, hasta mediados de los años 70.

Las ciencias sociales han prestado bastante atención a los procesos de reforma económica enmarcados por las leyes de Reforma del Estado (23.696) y de Convertibilidad (23.928)

\* Esta investigación se realizó al mismo tiempo que un estudio más extenso dedicado a analizar los procesos de movilización y la conformación de organizaciones de desocupados en todo el país. Ese trabajo fue realizado junto a Maristella Svampa y dio lugar a la publicación de un libro (Svampa y Pereyra, 2003), motivo por el cual le agradezco lo que le pertenece también de este texto. Mi agradecimiento también por la lectura crítica y los comentarios que realizaron Alejandro Grimson y Sergio Caggiano a una primera versión de este trabajo.

de los años 1989 y 1991. Varios estudios analizaron tanto sus componentes específicos como sus resultados políticos y sociales en diversos aspectos (Gerchunoff y Torre, 1996; Aronskind, 2001; Basualdo, 2002; Sidicaro, 2002).

En términos generales, existe un cierto acuerdo en considerar que luego de finalizada la década del 90, el país cambió radicalmente su fisonomía, especialmente en lo que se refiere a la estructura productiva y al papel del Estado en relación con la economía. La confirmación de la fuerte ola antiestatista así como la liberalización de la economía produjeron un nuevo panorama, uno de cuyos rasgos más sobresalientes fue el aumento muy significativo de la tasa de desempleo<sup>1</sup>.

Efectivamente, tanto las privatizaciones como la reducción de empresas enfrentadas a una dura competencia como resultado de la apertura económica produjeron una expulsión masiva de trabajadores del mercado de trabajo. Sumado a esto, el fracaso o la simple ausencia de políticas de reconversión económica y laboral; las crisis financieras de los estados provinciales y del propio Estado nacional acuciados por las deudas a partir de 1995 y los efectos de la recesión económica, contribuyeron a dibujar un paisaje sumamente crítico.

Tres tipos de análisis se hicieron muy presentes en las discusiones intelectuales y políticas de la segunda mitad de la década del '90:

- En primer lugar algunos trabajos se han ocupado de la denominada crisis de las economías regionales, ligada a las políticas de privatización de algunas de las empresas del Estado (Rofman, 1999).
- En segundo lugar, se realizaron numerosos análisis sobre la evolución del mercado de trabajo y sobre los efectos de la crisis inédita del empleo (Beccaria y López, 1996; Soldano, 1997; AAVV, 2002).
- Por último, los intensos procesos de movilización social que se multiplicaron en el interior de la Argentina suscitaban también la atención de técnicos y académicos (Jelin, 1994; Scribano, 1999; Farinetti, 1999; Schuster y Pereyra, 2001; Auyero, 2002; Svampa, 2002; Merklen, 2003).

Uno de los aspectos que acompañó estos fenómenos y sus consecuentes reflexiones fue la respuesta encarada por el Estado para hacer frente a la durísima e inédita situación social. Desde principios de 1996, el Estado nacional decidió poner en marcha programas asistenciales (Programa Trabajar) destinados a realizar proyectos puntuales (especialmente infraestructura y obra pública) utilizando como mano de obra a desempleados de todo el país.

<sup>1</sup> Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la tasa de desempleo aumentó del 7% en 1991 al 18,5% en 1995.

El Estado a través del Ministerio de Trabajo de la Nación debía proveer materiales y subsidios de \$160 (equivalentes en esa época a \$ 160 dólares) por mes durante el período que duraran los proyectos (inicialmente fue prevista una duración de entre tres y seis meses).

Entre 1996 y 2002 –momento en que finalizaron los últimos “planes trabajar”– el Estado Nacional (más allá del cambio de gobierno operado en 1999 y de la crisis y el nuevo cambio de gobierno a fines de 2001) concentró buena parte de sus esfuerzos en materia de política asistencial en la distribución de los planes trabajar, en general, haciendo frente a la proliferación de escenas de movilización y de alta conflictividad.

Sin embargo, los tres programas trabajar que se sucedieron en esos años –hasta la entrada en vigor del Plan Jefes Hogar en 2002– no fueron las únicas políticas asistenciales que conoció la Argentina. Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social llevó adelante varios programas específicos destinados fundamentalmente a la distribución de alimentos. También las provincias fueron desarrollando programas laborales y asistenciales específicos aún antes de que comenzaran a funcionar los planes nacionales. Así, el desarrollo de políticas sociales también fue objeto de atención y análisis durante los últimos años (Wood, 1998; Merlinsky, 2000; Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2001; Barattini, 2002).

Al ocuparse de macro procesos sociales o al concentrarse en una dimensión nacional de la política, muchos de estos estudios tendieron a perder de vista la forma en que todos estos fenómenos se interrelacionaron para producir dinámicas particulares en diversas situaciones. Por tal motivo, nutrido de la diversidad de estos análisis, este trabajo se ha concentrado en un estudio de caso.

En el norte de la Provincia de Salta, los efectos de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales han resultado –a falta del desarrollo de otras actividades económicas– particularmente desastrosos. Luego de varios años en los cuales los ex empleados naufragaron en sus emprendimientos productivos o en las heterodoxas inversiones realizadas con el dinero de las indemnizaciones y de los retiros voluntarios, la desestructuración comenzó a hacer estragos arrasando toda la estructura económica de ciudades enteras.

Este fue el caso de General Enrique Mosconi, localidad del norte salteño cuyo esplendor económico estuvo fuertemente ligado a la explotación petrolera en la zona. En ese contexto, la crisis económica vinculada a la transformación de las formas de producción luego de la privatización llevó en pocos años a fuertes procesos de movilización social que adoptaron la forma de multitudinarios cortes de ruta motorizados por ententes multisectoriales en los cuales confluyeron no sólo ex empleados y desocupados en general sino también comerciantes, pequeños empresarios y profesionales.

Los cortes de ruta así como las puebladas que surgieron de dichos cortes resultaron en la conformación de una importante organización de desocupados, la Unión de Trabajadores

Desocupados de General Mosconi, que se fue forjando al calor de la lucha y que progresivamente fue liderando los procesos de movilización.

Como en otros casos similares<sup>2</sup>, el gobierno provincial y el nacional recurrieron a la distribución de planes –junto con otras estrategias como la represión– con el objeto de hacer frente a las movilizaciones y a la demanda de respuesta urgente que se hacía entender en los cortes. Originalmente, la administración de los planes fue otorgada al municipio aunque, luego de varios años y en un contexto de abierta confrontación, la UTD de General Mosconi desplazó a las autoridades locales como principal administrador de los mismos.

Esta experiencia particular ha suscitado una serie de interrogantes que permitieron organizar la presente investigación. En primer lugar, una pregunta fundamental se refiere al tipo de organización social y económica que funcionaba alrededor de YPF y que dio lugar, luego de la privatización, a un fenómeno de descolectivización, crisis y, finalmente, de movilización. Este interrogante es abordado en el segundo apartado a partir de un intento de reconstrucción de los patrones de organización que regularon el modelo de desarrollo de YPF así como del tipo de integración configurado en torno al funcionamiento de la empresa petrolera. Este modelo es confrontado allí con el escenario que comenzó a configurarse luego de la privatización y que culminó en los sucesivos cortes de ruta y enfrentamientos que se produjeron entre 1997 y 2001.

En segundo lugar, en el tercer apartado se presentan brevemente los orígenes, la composición y la dinámica de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi. La pregunta que nos formulamos allí se refiere al tipo de contexto y de historia que permiten comprender el surgimiento de un actor social compuesto por desocupados. Esto supone un problema específico dado que, en general, los análisis que parten de la constatación de una crisis en la sociedad salarial o de la desarticulación de un modelo de sociedad ligado al Estado de bienestar, aseguran que los excluidos no constituyen un grupo ni una categoría social en virtud de su heterogeneidad:

“...los excluidos son en cierta forma ‘irrepresentables’: no constituyen una clase que podría tener delegados o voceros. Es por ello que no hay sindicatos de desempleados y que todas las tentativas de transformar, de una manera u otra, a los millones de desempleados en una fuerza colectiva organizada han fracasado siempre” (Rosanvallon, 1995: 204; traducción propia).

“Cuando la base [el trabajo asalariado] sobre la cual se había edificado su identidad social se desmorona, es difícil hablar en nombre propio, aún para decir no. La lucha supone la existencia de un colectivo y de un proyecto para el futuro. Los *inútiles para el*

<sup>2</sup> Para un análisis general de los procesos de organización y movilización de desocupados en Argentina en los 90 ver: Oviedo, 2001; Svampa y Pereyra, 2003.

*mundo* pueden elegir entre la resignación y la violencia esporádica, la ‘rabia’ (Dubet), la que la mayor parte de las veces es autodestructiva” (Castel, 2001: 666-667; traducción propia, el subrayado es nuestro).

Nos detendremos, entonces, en el decurso que llevó a esos sujetos a la producción de un actor colectivo en las condiciones más adversas y analizaremos de qué manera ese actor fue ganando espacios de poder y reconocimiento hasta constituirse en una referencia fundamental de la vida y la política de la comunidad. En este punto, se hace visible nuestro problema central, a saber: la forma en que las políticas asistenciales puestas en obra por parte del Estado Nacional y la Provincia se involucraron de manera decisiva en este proceso. Como veremos más adelante, la evaluación de esos resultados no pueden ser comprendidos más que atendiendo a la situación particular en la que los planes fueron recibidos, administrados y utilizados.

Efectivamente, la distribución de los planes Trabajar resultó una condición de posibilidad –asimilable a una consecuencia no intencionada de la acción– para la creación de organizaciones de desocupados. En ese proceso, los planes cumplieron su objetivo inmediato que fue apaciguar las movilizaciones y sacar a los actores de la ruta. Sin embargo, los planes produjeron mucho más que eso pues su apropiación por parte de la organización de desocupados permitió que se convirtieran, a su vez, en recursos comunitarios útiles, quebrando la lógica de administración municipal. Finalmente, los planes se instalaron como derechos en el horizonte de una comunidad fuertemente nostálgica de sus “lazos salariales”. Ese último paso generó nuevas tensiones, nuevas expectativas y nuevos desenlaces que serán el objeto central de las conclusiones de este trabajo.

En las páginas que siguen proponemos, en definitiva, un análisis de la implementación del Programa Trabajar, pero atendiendo a su impacto particular en una comunidad determinada. Esta decisión se vincula fundamentalmente, con la pretensión de asumir la complejidad que presentan los fenómenos de implementación de políticas públicas que más que ser aprehendidos en su totalidad deben ser interrogados en virtud de situaciones sociales concretas. Es en esas situaciones en las que las políticas pueden ser percibidas como espacios de negociación y conflicto –entre autoridades y diversos actores comunitarios– en los cuales se producen múltiples interacciones que dan cuenta tanto de esfuerzos estratégicos guiados por intereses como de zonas de entendimiento que permiten una regulación de dichas situaciones (Roberts, 2001 y Long, 1999).

Para abordar el caso seleccionado, se efectuaron dos viajes a la localidad de General Enrique Mosconi con el fin de llevar adelante las tareas de recolección de datos. En total se realizaron catorce entrevistas a militantes de las distintas organizaciones y corrientes de desocupados en la zona; la mayoría de ellas, en razón de los objetivos del estudio, a miembros de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi (UTD). El trabajo de campo tam-

bién nos permitió tomar contacto con algunos pequeños y medianos empresarios de la zona así como con empleados y gestores de las empresas petroleras y diversos personajes de la política local.

En segundo lugar, se realizaron también cinco entrevistas grupales las cuales resultaron especialmente útiles para confrontar las perspectivas de los militantes sobre algunos temas particulares como la definición de la propia situación, la experiencia de los cortes de ruta y la lucha en general, su visión sobre otros actores de la política local, provincial y nacional y algunos aspectos de sus organizaciones. En tercer lugar, los viajes sirvieron para desarrollar observaciones de las prácticas de los miembros de las organizaciones de desocupados en distintas situaciones específicas de la vida cotidiana. Se pudo asistir, entonces, tanto a las actividades que caracterizan la gestión cotidiana de las organizaciones –particularmente de la UTD– (reuniones de organización y distribución de las tareas de cada cuadrilla relacionada con los proyectos de los planes de empleo, reuniones de administración y de discusión política, trabajo en los proyectos, etc.).

En el segundo de los viajes tuvimos oportunidad de presenciar un corte de ruta y discutir con los propios actores en los distintos piquetes así como asistir al levantamiento del mismo y todas sus actividades colaterales. Por último, para la reconstrucción de algunos de los acontecimientos históricos que se describen en el segundo apartado se recurrió a documentos facilitados por las organizaciones y al relevamiento de información en medios gráficos nacionales y provinciales.

## ***II. La vida con y sin Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF): del mundo del trabajo y el Estado de bienestar a la crisis y la descolectivización***

La localidad de General Enrique Mosconi se encuentra en el departamento de General San Martín, en la Provincia de Salta. Es una zona rica en yacimientos petrolíferos y gasíferos. Como tantas otras localidades petroleras de la Argentina, su desarrollo estuvo profundamente ligado a la explotación realizada durante casi todo el siglo XX por la principal empresa petrolera del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Desde su creación en 1922 y hasta su privatización y reestructuración setenta años más tarde, YPF fue un “modelo de civilización territorial” pues su modalidad de ocupación del territorio no se circunscribió a la sola explotación de los recursos naturales sino que incluyó en todos los casos una extensa red de servicios sociales, recreativos y residenciales para el personal permanente (Rofman, 1999: 199). Más aún, todo indica que YPF se constituyó en un verdadero Estado dentro del Estado, así, el mundo laboral de la zona explotada, y de manera

más extensa, el conjunto de la vida social del lugar, se estructuraba directa o indirectamente en torno de YPF.

*“Entonces YPF es un enorme Estado dentro del Estado. Un Estado que brindaba salud, se hacía cargo de los aeropuertos, las comunicaciones telefónicas, la provisión de agua, energía eléctrica, cortaba el pasto de las plazas, mantenía los jardines, la municipalidad. Eso demoró que la gente se hiciera de la idea de que YPF ya no estaba y que había que movilizar muchas cosas. No son cuestiones simples de resolver”* (Entrevista del autor a Marcos, un ejecutivo de una empresa petrolera norteamericana, Tartagal, Salta, agosto de 2002).

Por lo anterior podemos decir que las consecuencias sociales y económicas de la privatización de YPF –entre los años 1991 y 1992– fueron devastadoras. La privatización de los yacimientos, las plantas y las destilerías de YPF, (la empresa sólo quedó a cargo de la comercialización) implicó el despido de alrededor del 90% de su planta de empleados<sup>3</sup>. A la ausencia de cualquier proyecto de reconversión productiva orientado desde el Estado se sumó el rápido fracaso de las estrategias particulares de readaptación a la nueva economía. Así, esas localidades presentaron en poco tiempo dramáticas cifras de desocupación que se ubicaban muy por encima de la media nacional.

En 1997, el panorama en las localidades del norte salteño se había transformado vertiginosamente. Mostraba un aumento exponencial del desempleo –diversos estudios calculan tasas de entre el 40% y el 50% de la población activa en Mosconi y Tartagal (Lapegna, 2001, y Esquerro et al., 2002)– además la reorganización laboral, ligada a la privatización, estuvo marcada por una fuerte flexibilización que incluyó la descentralización y desregulación de los antiguos sectores de la empresa, la limitación en el pago de horas extras, la intensificación del tiempo de trabajo y la incorporación de nuevas tecnologías (Rofman, 1999: 111).

Para comprender la manera en que la retirada de YPF afectó a estas localidades resulta necesario explorar el tipo de organización social que produjo en los años de su implantación y desarrollo. El modelo que implementó esta empresa se asentaba sobre dos ejes: por un lado, YPF representaba un ejemplo paradigmático de las garantías y oportunidades del Estado social argentino. Tanto es así, que los trabajadores de YPF eran considerados como una suerte de “aristocracia” dentro de las empresas productivas que administraba el Estado nacional. Por el otro lado, YPF implementó un modelo de relaciones sociales fuertemente jerárquico, reforzado por una segregación espacial, tal como ocurrió con tantas otras economías de

<sup>3</sup> La empresa, que en 1990 contaba con 51.000 empleados, luego de un acelerado proceso de reestructuración, que incluía retiros voluntarios y despidos, pasó a tener 5.600 empleados (Neuman, 2001). Las bajas contabilizadas entre 1990 y 1997 fueron las siguientes: para la zona salteña, 3.400, en la región neuquina, 4.246; en la cuenca austral, 1.660; en Comodoro Rivadavia, 4.402 y, finalmente, en Santa Fe (San Lorenzo), 1.177 (Esquerro et al., 2002, p.7).

enclave en el cono sur. Esto se ilustra gracias a las localidades fundadas por YPF: mientras que Campamento Vespucio fue concebido como residencia de los altos directivos y los profesionales ligados a YPF, General Mosconi fue la localidad creada para el asentamiento exclusivo de los trabajadores de las categorías bajas y medias-bajas de la empresa. La homogeneidad social, resultado de esta segmentación espacial es pues uno de los rasgos diferenciadores de Mosconi<sup>4</sup>. Por último, el elemento articulador de los dos ejes del modelo ypefeano (bienestar material y jerarquía social) fue sin duda la marcada internalización de un discurso industrialista que colocaba el acento en el control estratégico de los recursos naturales como pilar de la soberanía nacional (Solberg, 1986).

El tema es de gran importancia a la hora de analizar la especificidad de la experiencia “piquetera” en Mosconi, en comparación con otros movimientos de desocupados de la zona, tal como su vecino Tartagal (cabeza de departamento y localidad más antigua, cuya población es heterogénea tanto desde el punto de vista económico como social), o más al norte, como la localidad petrolera de Aguaray, en donde las jerarquías sociales se incrustaron dentro de una misma comunidad.

La privatización apuntó a ajustar los costos operativos de la empresa reduciendo principalmente la planta de personal. Por otro lado, la nueva empresa redefinió sus estrategias de explotación modificando la cantidad y la ubicación de pozos, refinerías y administraciones en todo el país. En el norte de Salta, el paso a manos privadas de YPF no sólo representó una disminución de puestos de trabajo sino también una reducción de aproximadamente el 73% de la actividad petrolera (Beracochea, 1998: 4 y 8).

¿Por qué motivo las drásticas reducciones de personal y la caída de la actividad no produjo conflictos serios en el momento de la privatización? La respuesta puede encontrarse en el tipo de proceso que acompañó a los licenciamientos y retiros voluntarios. YPF pagó fuertes indemnizaciones a los empleados que aceptaron los retiros y la empresa, junto con los gobiernos y el sindicato petrolero (SUPE), favorecieron la creación de emprendimientos para hacerse cargo –privadamente– de las antiguas áreas operativas de YPF. De esta forma, los empleados adquirirían las maquinarias de la empresa y continuaban prestando servicio –como hasta ese momento– gracias a contratos de obra o de servicios; sin embargo, perdían su relación de dependencia al pasar a ser empresarios ellos mismos.

<sup>4</sup> El rasgo distintivo de esa homogeneidad no es tanto su realidad actual –la misma que existe desde hace varias décadas en los suburbios de Buenos Aires– sino las huellas que dejó una segregación que históricamente fue soporte de relaciones sociales fuertemente jerárquicas y concentradas en espacios geográficos reducidos. Mientras que en las grandes ciudades y sus alrededores, los procesos de segregación espacial son procesos recientes, en la localidad sujeta a análisis es un rasgo intrínseco a su fundación y a sus primeros desarrollos. En Mosconi, por ejemplo, hasta comienzos de la década del '70, una barrera –con custodia policial– separaba el barrio rico del resto del pueblo –pobre–. Los buses que cubrían el trayecto entre uno y otro eran sistemáticamente inspeccionados para evitar que se produjeran “infiltraciones”.

En un comienzo éstas nuevas PYMES contaron con un aliciente inicial, dado que obtuvieron contratos de servicios por dieciocho y veinticuatro meses. Sin embargo, después de 1993, lograr la renovación de los contratos y concesiones con la empresa privatizada comenzó a ser una tarea prácticamente irrealizable. Eso ocurrió en un contexto de caída del precio del petróleo, por lo cual YPF comenzó a reducir tanto los precios de los trabajos como también los plazos del contrato. Así "...cada nuevo contrato presentó mayores exigencias y para obtenerlo, las PYMES debieron pugnar con nuevos actores que se sumaban al mercado" (Neuman, 2001). La empresa continuó multiplicando sus exigencias reclamando bonificaciones, subdividiendo los contratos por zonas, en suma, fijando tarifas a niveles de costo tales, que para muchos se hizo imposible mantener los emprendimientos. A esto hay que agregar que la mayor parte de los equipos vendidos por YPF eran obsoletos y los ex empleados no tomaron el recaudo de invertir para modernizarlos. Al poco tiempo, las dificultades de renovación tecnológica coincidieron con el aumento de las exigencias de YPF. Por último, las empresas debían competir con aquellas otras empresas de servicios, de alta *performance* y acostumbradas a las reglas del mercado.

Por otro lado, no es menos cierto que, exentos de un asesoramiento serio, no todos los ex empleados de YPF, en tanto trabajadores asalariados de una empresa estatal, contaban con la preparación adecuada a la hora de devenir "empresarios". Añadamos a esto que, a falta de otras alternativas, para muchos resultó plausible una propuesta de reconversión impulsada por un conjunto de actores económicos y gremiales que además se sustentaba en un discurso que exaltaba las bondades del "ser empresario".

Sin embargo, a causa de la ausencia de criterios de administración, muchas de las empresas naufragaron tempranamente, atravesadas por dificultades ligadas al reconocimiento de la autoridad, a la toma de decisiones, a la escasa capacidad negociadora, a la imposibilidad de obtener contratos por incumplimiento de obligaciones impositivas, a la carencia de edificio propio y a la imposibilidad de acceso al crédito por falta de garantías prendarias o hipotecarias. Por último, a causa de problemas asociados con el elevado nivel de endeudamiento (Neuman, 2001, y Beracochea, 1998). Un elemento que no puede ignorarse es que, en medio del desconocimiento de los nuevos marcos de referencia, la mayoría terminó por reproducir las prácticas y hábitos adquiridos a lo largo de una carrera laboral llevada a cabo como trabajador asalariado dentro del Estado.

El conjunto de obstáculos y dificultades mencionados hizo que gran parte de estas experiencias terminaran en el fracaso. En la zona de Tartagal y Mosconi de un total de 30 emprendimientos cooperativos iniciales, ya habían desaparecido cerca de 26 en 1996 (Lodola, 2001). Este cuadro se completa, por un lado, con el hecho de que parte de las indemnizaciones se volcó a emprendimientos comerciales individuales (kioscos, remiserías) o fue destinada al consumo y adquisición de bienes (compra de automóviles, casas). Como es sabido, poco

tiempo después, esos negocios quebraron; parte de los bienes fueron vendidos y a la desocupación se le sumó la falta de oportunidades y la sensación de frustración y de fracaso.

Ahora bien, la desarticulación del modelo jerárquico de YPF en el departamento de General San Martín es anterior a su privatización; más bien se produjo en dos etapas sucesivas: una primera, que podemos situar aproximadamente en los años 70, trajo aparejado un debilitamiento progresivo de las fronteras sociales internas como producto de la modernización social y cultural. Pese a ello, la política de separación entre aquellos que eran “ypefeanos” y aquellos que no eran “ypefeanos”, continuó existiendo en todos los enclaves petroleros de YPF hasta el momento de su privatización. Incluso durante ese proceso, junto a la falta de presencia sindical –comprometida con el proyecto privatizador– las distinciones pesaron como obstáculo para generar una coalición anti-privatizadora:

*“...Yo pienso que el sindicato nuestro negoció, en ningún momento nos defendió y nosotros también algunas veces hacemos mea culpa porque nosotros también nos hemos dejado llevar porque no estaban las organizaciones que estaban ahora. Todo lo hace la experiencia porque si hubiese habido este movimiento, o sea la UTD por ejemplo que sale masivamente a la calle y en esa época hubiese habido eso no hubiera sucedido, en esa época hacíamos movimientos y sólo los hacía el ypefiano, no los hacía el otro empleado, el empleado municipal, lo veía con agrado y se ponían contentos de que nos iban a echar a nosotros y desgraciadamente era así porque como éramos empleados de YPF y nos veían con tantos beneficios...”* (Entrevista del autor a Modesto, ex ypefiano, empresario PYME, Mosconi, Salta, agosto de 2002).

La segunda etapa se abrió con el vertiginoso proceso de privatización que desarticuló estas estructuras de base, debilitando la política de separación socio-espacial (1991-1992), así como las fronteras existentes entre “ypefeanos” y “no-ypefeanos”. Como consecuencia del deterioro social y de la desocupación creciente que golpeó a todos los sectores, las fronteras sociales en el interior de (y entre) las localidades de Vespuccio, Mosconi y Tartagal, fueron desdibujándose. El desamparo social fue, por ende, generalizado y afectó a las distintas categorías sociales. Asimismo, la caída de la actividad y la baja en el poder adquisitivo de vastos sectores de la población terminó arrasando con el sector comercial, que por otro lado históricamente había sido un sector muy importante de estas localidades.

Hacia 1996 y 1997 –algunos años después de la privatización– el panorama de este tipo de localidades petroleras era realmente desolador. El único sector que mantenía cierta capacidad de subsistencia era el de empleados estatales que, por otro lado, ya comenzaba a sufrir las consecuencias de los ajustes de las economías provinciales. La caída y finalmente la desaparición de la actividad económica acompañaron el crecimiento de la desocupación y la retirada del costado benefactor de la YPF estatal.

En 1997 –poco tiempo después de que se produjera el segundo gran corte de ruta en la Provincia de Neuquén<sup>5</sup>– los habitantes de las localidades de Tartagal y Mosconi organizaron un corte de ruta que desencadenó, junto con los de Jujuy, una crisis que se extendió por todo el interior del país. Resulta interesante revisar el proceso que llevó hasta el corte a aquellos pobladores que se encontraban ya movilizados haciendo frente a algunas de las consecuencias de un proceso de desestructuración económica. Una dinámica catártica parece haberse desencadenado luego de que una comisión de vecinos que lideró una serie de asambleas decidieran en la última de ellas, realizada el miércoles 7 de mayo, salir a cortar la ruta (Clarín, 9 de mayo de 1997. “Salta: sigue cortada la ruta 34”).

Los propios referentes de la comisión –el periodista Marcelino Gerez y la concejal del Frepaso Graciela Zriki– habían comenzado una huelga de hambre unos días antes y encontraban un eco dispar en la serie de medidas que venían impulsando para reclamar por el mal funcionamiento de la empresa eléctrica local. La salida a la ruta, prevista para unas horas o un día a lo sumo, se extendió finalmente durante siete largos días en los cuales diversos sectores se fueron sumando hasta consolidar una verdadera «multisectorial». Ese carácter multitudinario y heterogéneo del corte permitió tanto su legitimación como su sostén material gracias a la circulación de alimentos para la gente en la ruta. Al mismo tiempo, ligado a los intentos de justificación del corte, emergió un discurso de “reparación histórica” que permitió una convergencia entre intereses diversos. Igual que en otras experiencias similares, los cortes permitieron la articulación clara de un discurso de legitimación de la movilización en torno de la figura de la *reparación histórica*. Un ejemplo de esa fundamentación se encuentra en la afirmación de José Fernández –referente de la UTD– consignada en un medio nacional durante el corte: “*Estamos parados sobre el petróleo, y en nuestras casas cocinamos con leña*” (Clarín, 12 de mayo de 1997, “Deciden mantener el corte de ruta”). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en Neuquén, en Mosconi el destinatario central del discurso de la reparación histórica no fue simplemente el Estado Provincial o Nacional sino también, y preferentemente, las empresas multinacionales:

*“Porque aquí con las multinacionales que se llevan todas las riquezas; aquí las multinacionales lo único que dejan es desolación y muerte y nos vamos sumiendo en la más honda pobreza y tenemos que vivir supeditados a esos planes trabajar que no sirven nada, nosotros aquí, con la riqueza que hay tenemos que estar bien todos”* (Entrevista del autor a Juan (49 años), militante de la UTD, Mosconi, Salta, agosto de 2002).

El corte del 97 se extendió también a otras localidades del departamento de General San Martín, principalmente a Aguaray y Salvador Mazza al norte y a Cornejo, al sur de Tartagal

<sup>5</sup> En 1996 se había producido el primer gran corte de ruta motorizado por una multisectorial comunitaria en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén. Ver Svampa y Pereyra, 2003, capítulos 1 y 3.

y Mosconi, todas localidades situadas sobre la ruta nacional 34. No debe dejarse de lado el hecho de que la experiencia de las puebladas en Neuquén dejó entrever además de la potencia del formato de movilización, una percepción más clara de que sólo una respuesta comunitaria podría permitir hacer frente a los efectos generalizados de la desestructuración económica.

Ni la intransigencia, ni la particular falta de disposición al diálogo del gobernador de Salta –Juan Carlos Romero– pudieron más que el impactante retrato de miles de manifestantes a lo largo de la ruta 34 y de bloqueos que incluían autos y otros objetos para impedir la circulación. En este punto, es necesario ser claros para poder comprender lo que sucedió algunos años más tarde en estas localidades. Sólo la presencia masiva en la ruta, incluyendo a varios dirigentes políticos y empresarios de la zona impidió que el corte fuera reprimido, lo cual era una posibilidad inminente luego de que se produjera la intimación para el desalojo de la ruta. Al mismo tiempo, y a pesar de que pocos testimonios lo resaltan, en este como en los otros cortes la presencia de medios nacionales –con enviados especiales en la zona– tuvo también un importante efecto de resonancia que permitió parar la represión indiscriminada.

Por otro lado, el enfrentamiento fue impedido por la mediación del Obispo de Orán –Monseñor Cargniello– quién discutió largamente con los funcionarios oficiales y con la comisión de vecinos para que la negociación fuera exitosa. Esa mediación resultó sustantiva dado que el contenido de “ira moral personalizada” (referida a la figura del gobernador Romero) asociada al Estado asambleario y el debilitamiento de las mediaciones y las instituciones, quedó insatisfecho por la negativa del gobernador peronista de trasladarse a la zona (viajaron en su lugar, los ministros de Gobierno y de la Producción, Miguel Torino y Gilberto Oviedo). Igualmente, porque las reivindicaciones urgentes y de corto plazo (las que se obtuvieron como consecuencia del corte) estuvieron también repartidas desigualmente.

La propia estructuración de los piquetes en la zona de Tartagal y Mosconi pareció respetar una distancia entre los sectores dirigentes, ubicados en el piquete norte a la entrada de Mosconi, y los grupos de desocupados que conformaron el piquete sur, a la altura del cementerio (Lapegna, 2001). De todas formas, la escisión más importante del corte se produjo cuando comenzaron las negociaciones con el gobierno provincial. Un sector de los piqueteros, representados dentro del grupo de los 20 delegados de la comisión negociadora (que comprendía a las localidades de Mosconi, Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza) rechazó la primera propuesta. Durante el miércoles 14 de mayo una febril reunión en las instalaciones de la firma Tec-Petrol no permitió llegar a ninguna solución. Lo anterior llevó la situación al borde de la represión. Finalmente, el jueves 15, con un impresionante dispositivo de gendarmería que ya había llegado a la zona y nuevamente gracias a la mediación del obispo de Orán, se firmó un acta acuerdo y se levantó el corte (Lapegna, 2001).

Los desocupados de las cuatro ciudades que habían firmado el acuerdo constituyeron un tiempo más tarde la Coordinadora de Desocupados del Departamento General San Martín. Esto fue posible gracias a la formación de varias organizaciones de desocupados en las ciudades. Ese proceso, que se produjo en los dos años siguientes es una de las características más importantes del caso salteño. En este sentido, los desocupados –y fundamentalmente algunos referentes que fueron surgiendo de la experiencia de lucha– lejos de ser reabsorbidos por la pugna distributiva o incorporados por la recomposición política, fueron desarrollando organizaciones cuyo punto de anclaje era la experiencia (y la nostalgia) del trabajo asalariado y los cortes de ruta (vinculados a la obtención de planes como medio de subsistencia). Esas organizaciones no tenían gran capacidad de movilización propia, tal es así que el segundo gran corte de diciembre de 1999 –en Tartagal y Mosconi– comienza por un conflicto con el gremio de estatales (ATE).

A raíz del despido de un grupo de empleados municipales de Tartagal comienza una huelga y, al igual que en otras oportunidades, en una asamblea se decide iniciar un corte de ruta. En un primer intento de represión es detenido Fermín Hoyos, secretario general de ATE-Tartagal, y como consecuencia de ese episodio, los manifestantes toman de rehenes a un grupo de policías de la provincia de Salta<sup>6</sup>. Los grupos de piqueteros –quienes mantenían las obstrucciones en las rutas– mostraron en este corte una importante autonomía de decisión frente al sindicato estatal que tenía dudas incluso frente a la convocatoria al bloqueo de la ruta. Luego de que se resolviera el incidente, mientras que ATE intentó levantar el corte, los distintos grupos de desocupados decidieron seguir adelante hasta obtener “resultados concretos”. Una vez más, el corte cambiaba de manos en el medio de su realización. Finalmente, luego de las negociaciones directas entre una comisión de piqueteros y los gobiernos nacional y provincial, en Buenos Aires, el 23 de diciembre se decidió el levantamiento del corte<sup>7</sup>.

La mayor parte de los testimonios coinciden en que el proceso de autonomización de las organizaciones de desocupados comienza en ese momento, es decir, entre fines de 1999 y comienzos de 2000:

*“...Cuando se ha fundado esto, ha sido en el 99, bueno terminó la marcha después del 22 que terminó el corte, y en el 2000 nos han dado 250 planes y de ahí hemos empezado y aquí hemos tenido computadora... no había nada, luz, agua, nada, estaba todo muerto...”* (Entrevista del autor a Carlos (40 años), miembro de la UTD, Mosconi, Salta, agosto de 2002).

<sup>6</sup> Ese episodio fue el que publicitó a nivel nacional ese corte de diciembre de 1999.

<sup>7</sup> “Se le impuso al gobierno provincial la reincorporación de los municipales despedidos, lo que significaba un golpe al plan Romero de despedir 3.500 estatales en toda la provincia. Se le impuso al gobierno nacional el mantenimiento de los 1.963 ‘planes Trabajar’ y el otorgamiento de otros 3.000. Los 2.653 ‘planes’ provinciales también fueron prorrogados, pero apenas por un mes...” (Oviedo, 2001: 95).

*“...Desde el 99 hasta la fecha existen los otros planes nacionales que ya los manejan por ejemplo parte de la UTD y hay otra parte que también los maneja el gobierno de la provincia, planes de la provincia”* (Entrevista del autor a Juan (49 años), miembro de la UTD, Mosconi, Salta, agosto de 2002).

A partir del establecimiento de esa dinámica de obtención y control de planes, las organizaciones piqueteras adquirieron relevancia y capacidad de maniobra en el contexto de la política local. Sin embargo, como lo mencionamos antes, ese impulso llevó a tratar de generar instancias de coordinación de los agrupamientos de cada una de las ciudades. Así comenzaron los intentos de coordinación departamental que, sin embargo, presentaron muchas dificultades para funcionar aún cuando los piquetes de las distintas ciudades reaparecerían en los momentos álgidos al menos hasta el año 2001.

En cada una de las ciudades del departamento el panorama de organización de los desocupados era muy diferente. En Tartagal, por ejemplo, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) liderada por el Partido Obrero logró con los años constituirse en una organización con cierto peso; sin embargo, la fragmentación se acentuó desde 2001 en adelante debido a que varios de los referentes de desocupados se mantenían dentro de la estructura de militancia del Partido Justicialista y nunca llegó a generarse un único agrupamiento. En Mosconi, por el contrario, la UTD nucleaba a todos los referentes más importantes que, por otro lado, en ese momento todavía no mostraban grandes diferencias entre sí. Precisamente, aún cuando fuertes enfrentamientos alejaron al tiempo a muchos de los referentes, la UTD siguió siendo la principal organización piquetera de la ciudad. Como será analizado en el apartado siguiente, esa legitimidad sería obtenida no sólo en la ruta sino en el trabajo comunitario cotidiano desarrollado por los militantes de la UTD.

Para mayo de 2000, momento en que se realiza el tercer gran corte de ruta en la zona y la primera gran pueblada, los desocupados agrupados en la UTD representaban ya un actor importante a nivel local. Ese conflicto sería el último que encontraría relativamente unidas a todas las ciudades del departamento. A partir de allí, Mosconi comenzaría progresivamente a ser individualizada como el eje de las movilizaciones piqueteras frente a una fragmentación creciente de los grupos de desocupados en el resto del departamento.

Los acontecimientos de mayo de 2000 muestran a cabalidad de qué manera la dinámica de movilización de los cortes respondió en muchos casos a intereses y fuerzas de los más diversos y cómo, una vez iniciada esa dinámica, se vuelve impredecible. Un nuevo corte de la ruta nacional 34 se decide en la zona de Tartagal y Mosconi. En este caso, los intendentes de ambas localidades llamaron a la movilización para presionar en el contexto de la reestructuración político-económica que había desencadenado el cambio de gobierno y la vertiginosa interna del peronismo (Lapegna, 2001: 34). Más allá de eso, lo importante es que la cantidad

de gente que dependía de los planes nacionales y provinciales era realmente considerable y, en la medida en que se registraban problemas en los pagos, el corte fue masivo.

Luego de una semana, el 9 de mayo, a raíz del cierre del diálogo con los gobiernos provincial y nacional, el juez federal Miguel Medina pidió refuerzos de gendarmería al gobierno nacional para iniciar, luego de la intimación, el desalojo de la ruta. Tres largos días corrieron hasta que en la madrugada del sábado 12 de mayo, comenzó una durísima represión. En esos días, a causa de las amenazas de represión y el cansancio, el corte fue dejando solos en la ruta a un grupo de 300 piqueteros de Mosconi que, organizados en dos piquetes, estaban dispuestos a sostener un austero petitorio de cinco puntos. Dos de esos puntos, discutidos en un Comité de Crisis, encabezado por el titular del Consejo Nacional de Seguridad –Luis Oriundo– eran los que trababan las negociaciones: el desprocesamiento de los piqueteros y el aumento de la cantidad de planes trabajar. Uno de los momentos más álgidos de tensión se vivió, en ese momento, cuando los manifestantes ingresaron al predio de la empresa Refinor, situado en la entrada a Mosconi, y amenazaron con volar los tanques de petróleo si se intentaba despejar la ruta por la fuerza. Finalmente, el 11 de mayo se terminaron definitivamente las negociaciones y ante la inminente represión volvió a reunirse una multitud en la ruta en los cortes de Mosconi, en un clima de mucha tensión<sup>8</sup>.

A las 5 de la mañana del 12 de mayo unos seiscientos efectivos de la Gendarmería Nacional comenzaron a desalojar la ruta 34. Allí comenzaría una jornada entera de enfrentamientos cuyos ribetes más dramáticos serían producidos por el intento de ocupación de Mosconi que realizó la policía provincial<sup>9</sup>. Dos piquetes principales cortaban la ruta al momento de la represión: el primero, liderado por José “Pepino” Fernández se ubicaba –como de costumbre– frente al cementerio de Mosconi; el segundo, ubicado en la entrada de Mosconi –frente a los tanques– era liderado por Juan Domingo Javier, un hombre del intendente de Tartagal<sup>10</sup>.

Esa madrugada, luego de que fuera despejada la ruta, la policía provincial para lograr maximizar las detenciones y probablemente también para darse una revancha respecto del 99, entraron al pueblo y comenzaron a requisar las casas y a enfrentarse cuerpo a cuerpo con los pobladores. Inmediatamente, la gente empezó a salir y a desafiar a los uniformados que

<sup>8</sup> La tensión se vinculaba fuertemente con la historia de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, especialmente con la policía provincial. Esa historia había tenido en los primeros días del corte un episodio muy oscuro. Dos jóvenes de los piquetes de Mosconi –Alejandro Gómez (18) y Miguel Cabral (20)– murieron al incendiarse su camioneta camino a la localidad de Yuto. A la versión oficial del accidente de tránsito, toda la población de Mosconi oponía la hipótesis del asesinato por parte de la policía.

<sup>9</sup> Un número indeterminado de heridos –civiles y gendarmes– fue el resultado de los enfrentamientos. La única víctima fue Víctor Jofré (un chofer de camiones que no estaba vinculado al corte), quién murió de un paro cardíaco.

<sup>10</sup> Las crónicas sostenían en ese momento que Javier había abandonado el piquete antes de la represión (*Clarín*, 13 de mayo de 2000, “Las cabezas visibles”).

fueron obligados a volver a la ruta y a replegarse cuando llegó una columna de 10.000 manifestantes desde Tartagal y otras localidades del norte. Varios manifestantes se dirigieron entonces hasta la municipalidad y hacia otras oficinas administrativas que fueron destrozadas e incendiadas.

Finalmente, en la noche una comisión negociadora del gobierno nacional llegó a Mosconi y entabló un nuevo diálogo con los piqueteros<sup>11</sup>. Los enfrentamientos habían cesado nuevamente gracias a la intervención de la iglesia cuyos representantes se interpusieron literalmente entre policías y gendarmes, de un lado y piqueteros del otro<sup>12</sup>.

*“...se vinieron gente de Pocitos, de Aguaray, se venían en vehículos, al escuchar toda la represión, se vinieron más cuando dijeron que se habían metido al pueblo, que había tomado el pueblo la policía, se vino, la gente de Tartagal, vinieron todos, la gente de Mosconi. Nosotros salimos por acá por la vía y ahí nos juntamos con gendarmería, pero estábamos ahí, a un metro, de este lado y de este lado. Por el cura no se arma una masacre ese día, la gente quería que se soluciones de una sola vez, que se arregle todo, nos matan o los matamos, una de dos...”* (Entrevista del autor a Sombra (22 años), militante de la UTD, Mosconi, Salta, agosto de 2002).

Doce horas de negociación en las oficinas de la empresa Tec-Petrol dieron lugar a un nuevo acuerdo –a tres años del primer gran corte de ruta– que permitió el levantamiento del corte al mediodía del 13 de mayo. En una asamblea –que reflejaba la consolidación de la UTD de Mosconi como actor de poder y el liderazgo de Pepino Fernández dentro de la organización– se anunciaron y se aprobaron los contenidos del acuerdo. Se habían logrado los objetivos principales, a saber, un aumento de 1.600 a 3.000 subsidios (incluyendo los planes trabajar y los provinciales) y la liberación de los 43 detenidos durante la represión<sup>13</sup>. Pero, al mismo tiempo, el acuerdo hacía efectiva la intervención a los municipios de General Mosconi, Tartagal

<sup>11</sup> La comisión oficial estaba integrada por el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Horacio Viqueira; el secretario de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Bustelo; el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Walter Ceballos, y los subsecretarios de Interior y de Asuntos Institucionales del mismo ministerio, César Martucci y Lautaro García Batallán. También se integró el dirigente de la CGT regional Salta, de la línea de la CGT oficial, Sergio Aguilera (*Clarín*, 13 de mayo de 2000, “Estallido en Salta: la Iglesia interviene para una salida negociada”).

<sup>12</sup> Ver también: *Clarín*, 14 de mayo de 2000, “Destacan el rol que jugó la Iglesia”.

<sup>13</sup> A continuación detallamos los principales puntos del acuerdo: entre junio y diciembre de ese año se ejecutarían, a través de Cáritas, proyectos de empleo transitorio para 3 mil desocupados; la provincia puso a disposición de las PyMEs 4 millones de pesos en créditos a tasas subsidiadas para proyectos productivos; la Nación creó un fondo de subsidios de 150 mil pesos para proyectos empresariales de hasta 15 mil pesos cada uno; la Nación y la provincia pondrían en marcha una línea de crédito, a través del Banco Nación, para compra de tecnología nacional a tasa subsidiada para las PyMEs; se acordó que no habrá represalias contra los líderes de la protesta; el gobierno nacional se comprometió a reforzar con dos mil módulos alimentarios al departamento de General San Martín, en forma bimensual; la provincia llevaría adelante las investigaciones para esclarecer los posibles excesos policiales (*Clarín*, 14 de mayo de 2000, “Las claves del arreglo”).

y Aguaray lo que constituía un resultado sumamente paradójico para los dirigentes locales que habían impulsado el inicio del corte.

Al mismo tiempo, en el espacio que se producía entre las dimensiones local, provincial y nacional de la política, los piqueteros de Mosconi iban consolidando su capacidad para negociar planes que mantenían bajo control. Por otro lado, la organización mostraba también una legitimidad tal que le permitía respaldar sus medidas de acción directa con un potencial levantamiento de las comunidades.

Sin embargo, la situación en el departamento no cesó de volverse cada vez más compleja a medida que los cortes se volvieron más evanescentes pero también más recurrentes, especialmente como consecuencia de los diferentes grupos de desocupados que coexistían en Tartagal. Mientras los grupos protestaban y negociaban individualmente los cortes no tenían mayores consecuencias, sin embargo bastaba que diversos grupos comenzaran a converger en la ruta para que la situación cambiara radicalmente.

A comienzos de noviembre del 2000 en uno de esos cortes en la zona de Cuña Muerta, se sumaron a un grupo de desocupados –cosa no demasiado habitual– representantes de varias comunidades aborígenes. El jueves 9 de noviembre –a diez días de iniciado el corte– los piqueteros se desplazaron y volvieron a instalar los míticos piquetes de General Mosconi. En esta oportunidad, la represión realizada por la policía provincial culminó con el asesinato de un chofer de la empresa Atahualpa –Aníbal Verón– y eso provocó una nueva concentración de pobladores de las ciudades del departamento que marcharon por las calles de Tartagal y Mosconi atacando edificios públicos y comercios privados<sup>14</sup>. Una nueva escena del enfrentamiento entre piqueteros y policías se prolongó durante buena parte del viernes 10 de noviembre hasta que, por orden del juez federal Abel Cornejo –quien informaba y coordinaba sus decisiones con un nuevo Comité de Crisis constituido en Salta– intervino la gendarmería para intentar frenar los enfrentamientos.

Con el panorama de los cortes en Mosconi, Cuña Muerta, Aguaray y Salvador Massa, los piqueteros se reunieron una vez más con funcionarios del gobierno nacional –Ceballos de Interior y Gerardo Morales de Desarrollo Social– para tratar de llegar a un acuerdo. El diálogo finalizó el 13 de noviembre con el levantamiento del corte –luego de que Mosconi aceptara la escueta propuesta oficial– mientras algunos referentes del PJ convocaban a la gente a la ruta para proseguir con los cortes<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> En este caso fue incendiada la Municipalidad de Tartagal y fueron atacadas varias comisarías en los dos municipios. Cinco policías de Mosconi fueron tomados como rehenes y liberados tiempo después como consecuencia de las negociaciones. De una de las comisarías desaparecieron armas largas que fueron devueltas para que los funcionarios nacionales accedieran a comenzar el diálogo (*La Nación*, 13 de noviembre de 2000, “El gobierno nacional se reunió con los piqueteros de Mosconi”).

<sup>15</sup> La actitud del gobierno provincial y del PJ a nivel local eran claras: por un lado, tratar de obtener recursos de las negociaciones en las rutas y, por otro, tensar la situación para que los cortes se resolvieran con

Como veremos en el apartado siguiente, durante el año 2001 la dinámica de movilización estuvo vinculada a las actividades de la UTD y a su intento por darle algún contenido a los planes asistenciales. Sin embargo, es necesario señalar que en junio de 2001, tuvo lugar una escena más de la confrontación entre piqueteros y fuerzas de seguridad. El día 17, luego de varios días de corte, un enfrentamiento armado tuvo lugar en Mosconi con el resultado de dos piqueteros muertos. Frente al estupor y la incertidumbre, el gobierno nacional decidió hacer públicos varios informes reservados de organismos de inteligencia que aseguraban que los piqueteros habían “apostado francotiradores” en Mosconi para emboscar a la gendarmería. El hecho constituía según los organismos, un paso más en el desarrollo de nuevos grupos dispuestos a tomar el poder por las armas.

A medida que la tensión dejó paso a la calma, esos informes fueron desmentidos por informaciones que indicaban que agentes y ex agentes de la gendarmería habían comenzado con los disparos<sup>16</sup>. Un nuevo sitio se cernía sobre Mosconi mientras la policía y la gendarmería ingresaban a los domicilios particulares buscando a los dirigentes piqueteros. Estos, instalados en carpas en la plaza principal de la ciudad, lograban mantenerse indemnes gracias al apoyo de sus vecinos que les reconocían una legitimidad que le estaba definitivamente vedada al poder político local. Luego de varios días, finalmente el gobierno accedió a detener los procesamientos e inició un diálogo con los piqueteros por intermedio del ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, quien realizó una sonada visita a la zona. El gobierno nacional, decidió apoyar, en ese momento, el trabajo que la UTD venía realizando en términos de obras comunitarias y por primera vez la zona obtuvo un proyecto concreto de inversión y desarrollo productivo<sup>17</sup>.

Los piqueteros de la UTD, entrevistados en todos los medios nacionales, lograban revertir la embestida represiva al tiempo que reforzaban y relegitimaban su proyecto de desarrollo local –ideado para volver productivos los planes trabajar. Paradójicamente, ni aún después de cuatro largos años de conflicto, los piqueteros tuvieron oportunidad de dialogar frente a frente con el gobernador de la Provincia de Salta que se trasladó a la zona, se instaló sintomáticamente en Campamento Vespucio y decidió no recibirlos.

---

represiones que insumían un costo político al gobierno nacional a la vez que quizá permitirían sacar del medio a algún díscolo referente piquetero. *“Las palabras de Pocho [Normando Cabral, ex concejal peronista] son muy bonitas. Pero cuando viene la represión sólo quedamos pocos. La cana, por orden de Romero, ya le puso precio a la cabeza de varios, incluso la mía. Por eso, cuando la cosa se pone muy fea, donde puede haber muchos muertos, es preferible enfriar la cabeza y retirarnos. Ya habrá tiempo para volver.”* (Página 12, 14 de noviembre de 2000, “Aunque las promesas fueron pocas, se levantó el piquete de Mosconi”).

<sup>16</sup> Varias crónicas ligaban al gobernador de Salta y al ex presidente Carlos Menem con los hechos de violencia que se habían producido.

<sup>17</sup> Ese proyecto, elaborado y negociado por el entonces Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Enrique Martínez, nunca llegó a ponerse en práctica dado que a los pocos meses sobrevino la caída del gobierno.

### ***III. Un nuevo actor para la reapropiación de las políticas asistenciales***

Uno de los elementos que resulta más importante a la hora de comprender los procesos de movilización y organización de algunos de los pobladores de General Mosconi es el problema de su identificación. Preguntarse por qué algunos grupos de desocupados se movilizan y otros no lo hacen, pareciera ocultar un problema central: el de las formas de identificación de esos individuos para los cuales la categoría “desocupado” es sólo uno de los múltiples nombres que los interpelan. En este sentido, para algunos de los pobladores de Mosconi que decidieron salir a cortar la ruta en mayo de 1997, el ser desocupado representaba sólo uno de otros tantos elementos que definían su experiencia de vida.

Tal como se presentó en el apartado anterior, a comienzos de 1997 fuertes procesos de confrontación se registraron en casi todas las provincias de la Argentina y muchos de esos conflictos tuvieron un fuerte cariz comunitario; esto es, buena parte de las luchas en general –y de los cortes de ruta en particular– eran lideradas por multisectoriales que incluían a vastos sectores de la población. Desocupados se encontraban, entonces, junto a empleados estatales, maestros, comerciantes, pequeños empresarios e incluso políticos locales, todos afectados por los procesos de reestructuración –y de desestructuración– económica operados en el país. En este sentido, para muchos de esos sectores las experiencias de movilización valorizaron o revalorizaron los lazos de pertenencia a sus pueblos o sus ciudades. Ocurrió lo mismo para quienes sufrían la falta de trabajo, creando nuevos mitos y reactualizando viejas tradiciones.

En el caso de Mosconi, esta dimensión comunitaria no puede ser excluida de los elementos que permiten caracterizar a quienes desde 1998 integran la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi<sup>18</sup>. En efecto, un eje central que organiza los objetivos y las prácticas de la UTD es la nostalgia de la pujanza económica de la localidad de Mosconi y su orgullo en tanto que pueblo petrolero. En este sentido, la experiencia de los primeros cortes de ruta permitió que se superara una escisión muy marcada –la distinción entre ypefeanos y no ypefeanos– a la que hicimos referencia en el primer apartado.

Tampoco puede dejar de mencionarse que esas experiencias de lucha produjeron otra solidaridad que se aleja del espacio comunitario. Así, los militantes de la UTD de Mosconi se reconocen también como “piqueteros”. Habiendo surgido un año antes (1996) en la primera peblada registrada en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul (Provincia de Neuquen), ese nombre representa (más allá de las características y la suerte de aquellos primeros

<sup>18</sup> Si bien los testimonios informan que la creación del agrupamiento de desocupados data de 1996, la UTD con su fisonomía actual comenzó a funcionar en 1998, momento en que se obtuvo la concesión del predio en el que actualmente funciona su sede.

piqueteros) un elemento de identificación para quienes cortan rutas como recurso para hacerse visibles y para recuperar algún medio de presión y de negociación. En este sentido, piquetero y desocupado son identidades, a la vez indisociables pero ciertamente diferentes e incluso contradictorias.

Tomando como ejemplo algunos análisis realizados en torno a la categoría desocupado puede verse que un individuo que se define como piquetero se diferencia notablemente de alguien que se define como desocupado aún cuando la falta de trabajo los comprenda a ambos. Compárese a modo de ejemplo los fragmentos de entrevista que se transcriben a continuación:

*“Yo sé que algo hay que hacer porque no te puedes quedar en tu casa llorando. Pero las changas te deprimen porque pensás que al otro día estás otra vez buscando y buscando. Encima, acá todos los viejos quedamos igual, todos estamos en la misma. A veces, ves a alguno (o te ven) picando un cordón, cortando el pasto, pintando en alguna casa... te querés morir. Antes teníamos dignidad y podíamos estar juntos después en el club. Ya habías trabajado el día, lo que quedaba era para vos”* (Entrevista de Daniela Soldano a Juan, Villa Tesei, Provincia de Buenos Aires, 1997. Soldano, 1997: 12).

*“Trabajamos mucho, nosotros le hemos hecho entender a la gente que nosotros tenemos, para pedir algo tenemos que demostrar, para ser creíbles tenemos que mostrarlos y decirles a ellos que nosotros hacemos cosas, eso para nosotros es.... nosotros hablamos mucho entre nosotros, entonces la gente se ha ido para los costados porque antes vivían del bolsón, de un ayuda de los políticos, un día te dan un peso..... eso había que revertirlo, enseñándoles a trabajar, comprometiéndolos. Para colmo, los cortes nuestros son larguísimos. Cuando nosotros vamos a la ruta sabemos que tenemos que dormir 20 días, y se les hizo entender, porque algunos pensaban que llegaban a la casa e iban a tener la plata...”* (Entrevista del autor a Tomás (40 años), militante de la UTD, Mosconi, Salta, mayo 2002).

Efectivamente, de esta diferenciación resulta un elemento que abona en parte la hipótesis central de interpretación que sostiene este trabajo: mientras que la categoría de «desocupado», como criterio de identificación, produce aislamiento y pasividad –en buena medida como consecuencia de la vergüenza y la imposibilidad de aceptación de la propia condición– la de «piquetero» representa un espacio de reconocimiento y construcción común basado en una reivindicación de la dignidad y en un descubrimiento de “otras capacidades” distintas de la que ofrece la política de partidos de organización, de movilización y de presión política. Sin embargo, históricamente, ese espacio de identificación surgió con cierta ambigüedad, aquella que caracteriza a la militancia social y política y cuyo margen de legitimidad es bastante restringido en los sectores populares.

*“El hombre con su gorra de lana negra, se seca las lágrimas que le mojaron lo que le quedaba del cigarrillo: ‘No voy a decir que mi hijo no estuvo tirando piedras. Él tiene sus*

*motivos para ser piquetero. Ya me dijo que él no quiere ser como nosotros, los desocupados'..."* (Carín, 22 de junio de 2001, "En Mosconi, la calma se va imponiendo entre las quejas").

Sin embargo, para aclarar parte de estas proposiciones es necesario bucear aún más profundo en los múltiples criterios de identificación que recorren al grupo de militantes de la UTD de Mosconi. Podríamos decir que las entrevistas revelan que aún cuando desocupados y piqueteros, los militantes de la UTD se reconocen fundamentalmente, también como "trabajadores". En este caso particular, la noción de trabajador aparece fuertemente asociada al desarrollo de la cultura ypefeana. Aquí cabría una diferencia importante entre dos tipos de militantes de la UTD: por un lado, aquellos que generacionalmente formaron parte del modelo de integración ligado a YPF y para quienes la cultura del trabajo está representada por esa forma de estructuración del mundo del trabajo; por otro lado, aquellos que no formaron parte de YPF y que, o bien se reconocen como trabajadores bajo otros paradigmas (son los menos dentro de la UTD) o bien simplemente la categoría piqueteros los interpela más fuertemente que la de trabajador. Para esta distinción, el establecimiento de un corte generacional resulta muy pertinente; los jóvenes piqueteros de la UTD sostienen y se aferran al costado más combativo y violento de la identidad y, su lazo de pertenencia más fuerte está asociado a la experiencia de los combates en la ruta sea contra la policía o contra la gendarmería<sup>19</sup>.

Sin embargo, si bien la juventud soporta en buena medida la organización, su dirigencia pertenece a los que se reconocen como trabajadores y para quienes uno de los objetivos fundamentales de la organización es recrear simbólica y materialmente la cultura del trabajo. Esto quiere decir: sea buscar la forma de reconstruir el viejo modelo ypefeano, o bien producir un nuevo modelo de organización salarial o, cuánto menos, suplir el vacío y educar a las nuevas generaciones en la cultura del trabajo para dotar de sentido sus vidas.

Con respecto a la composición y organización de la UTD, otra dimensión central fue tomada en cuenta a la hora de definir el análisis del caso dado que, como sucede en la mayor parte de las contemporáneas organizaciones de desocupados, la participación de mujeres es

<sup>19</sup> Para entender la importancia de este elemento es necesario tener en cuenta la intensidad de los enfrentamientos. Esto se visualiza al considerar hasta qué punto "ganar la ruta" es un valor tanto para los piqueteros cuanto para las fuerzas de seguridad. Dos ejemplos, extraídos del corte de mayo de 2000 permiten clarificar esta cuestión: el primero, la narración de un diario nacional, dando cuenta que un grupo de gendarmes a cargo del comandante René Prado, luego de haber controlado la zona del primer piquete frente al cementerio de General Mosconi, se detuvieron y comenzaron a tomarse unas fotos de recuerdo; el segundo, un testimonio que es por demás elocuente: "Y yo les decía, nosotros no podemos cortar 24 horas, 48 horas y levantar. Nosotros cuando cortamos, cortamos. Si tenemos que pasar 10, 20, 30 días en un corte de ruta, lo pasamos. Yo les contaba que nosotros para cortar teníamos que cortar en serio, no podíamos cortar 24 horas y levantar, o porque se haga de noche e irnos, o porque vienen 2 policías y te digan que tenés que levantar. No, a nosotros nadie, una vez que cortamos la ruta nosotros somos los dueños de la ruta, a nosotros nadie va y nos dice qué hacer, una vez que estamos." (Entrevista del autor a Sombra (22 años), militante de la UTD, Mosconi, Salta, agosto de 2002).

mayoritaria. En este punto debe considerarse entonces que la desocupación afectó fuertemente los contornos tradicionales del mundo masculino. Expulsados del mercado laboral, los hombres fueron los protagonistas principales de un proceso de cambio que desembocó a la vez en una desestructuración social y en una dislocación personal. Así, partes completas de un mundo sedimentado y naturalizado en determinadas prácticas, expectativas y creencias, consideradas antes como evidentes, no resistieron la desestructuración abrupta de la cotidianeidad y se desmoronaron en pocos años. Desde esta perspectiva, no había posibilidad de recomposición —esto es de redefinición positiva— de la situación: la experiencia de la desocupación no podía conducir sino a la pasividad, la reclusión, la vergüenza, la autoculpabilización.

En ese espacio, las mujeres sin duda cobraron protagonismo, fundamentalmente al ocupar importantes roles en la movilización, la confrontación y la negociación que tradicionalmente resultaban impensables. Las mujeres interpeladas por la crítica situación económica de los hogares son una presencia constante y masiva en los cortes de ruta. Sin embargo, ese protagonismo no debe llevarnos a formular falsas conclusiones, al menos para el caso estudiado. En primer lugar, en la UTD, los principales referentes no son mujeres y éstas sólo se encuentran en el mejor de los casos en las líneas medias de militancia. En segundo lugar, una considerable división del trabajo se observa en la dinámica organizativa. En este sentido, las mujeres realizan preferentemente tareas administrativas mientras que los hombres son quienes se ocupan de los trabajos del tipo construcción, etc. Por último, si bien la presencia en los piquetes denota cierta alteración de los patrones tradicionales de relación entre los sexos, según se pudo observar, el rol de la mujer en los piquetes respeta estándares tradicionales como la provisión, la preparación de alimentos y, en general, el cuidado de los otros.

Por último, la vigencia de la categoría de «trabajador» implica —como es típico en el caso argentino— también varias consecuencias desde el punto de vista político. Si bien la asimilación más mecánica entre el hecho de ser trabajador y ser peronista —característica de la matriz populista (Martuccelli y Svampa, 1997)— fue quebrada en parte por las responsabilidades atribuidas al gobierno justicialista en lo que concierne a los procesos de reestructuración económica; en realidad esa relación se complejizó variando entre, por un lado, una tolerancia relativa a las distintas alternativas ofrecidas por las líneas internas del PJ (aún cuando el gobernador Romero pertenece a la línea menemista) y, por otro, una apatía e indiferencia respecto de los procesos electorales e institucionales en general de la política local, provincial y nacional.

Es necesario señalar que la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi nunca presentó candidatos en su nombre ni apoyó públicamente a ninguno de los partidos políticos que compiten a nivel local, provincial ni nacional. En realidad, mantiene dentro de la organización, una línea de tolerancia política y libertad de acción sostenida, en primer lugar, por el rechazo que manifiesta el referente más importante de la organización por la militancia parti-

daria y, en segundo lugar, por la pluralidad de pertenencias partidarias que tienen los integrantes de la UTD. También hay que mencionar que todos los referentes de la UTD que sostenían posiciones contrarias a esta definición apolítica de la organización han terminado por alejarse y, en algunos casos, han intentado desarrollar otras experiencias de movilización de desocupados<sup>20</sup>.

En conclusión, aún cuando algunos de sus miembros tienen militancia partidaria y funcionan, especialmente en períodos electorales como punteros políticos, la UTD mantiene una distancia considerable con la política partidaria. Esa distancia se apoya tanto la evaluación de los sucesivos gobiernos de distinto signo como en una desconfianza intrínseca hacia los discursos y procedimientos de la izquierda partidaria:

*“...Menem hizo destrozos, los militares hicieron destrozos, los radicales hicieron destrozos, nadie dice nada, entonces cuando salimos nos mandan palos, tanto el gobierno militar, el gobierno este...el justicialismo, en todos lados siempre nos mandan garrotazos y a la pared.”* (Entrevista del autor a José Fernández (42 años), referente principal de la UTD, Mosconi, Salta, mayo de 2002).

*“Ellos nunca van a llegar de sorpresa por motivos de que ellos se toman 10, 15 días para organizar, que tiene que salir Quilmes por un lado, que Tigre, que Varela, que tiene que salir de todo lado, que se tienen que juntar primero para ver cómo van a hacer, qué va a hacer cada uno, quién va a llevar, qué color de cartel va a llevar cada uno, qué color de bandera, ‘¿cómo vas a ir vos adelante?’, ‘que yo tengo más gente que vos’. Esas discusiones a divino cuete que no sirve de nada. Yo les dije ese día, ‘a lo mejor fue un error’, capaz que iba a poner a toda la izquierda en contra de los de Mosconi, pero, aparentemente no fue tan así, pero se los dije ahí, porque me sentí apoyado, porque empezaron a hablar. Primero hablaba de la CCC, después el del PO, se baja el del PO y sube el otro, de la CCC, y del PO, todos partidos de izquierda hablaban de que tenemos que hacer compañeros, yo no me consideraba compañero, de lucha te puedo aceptar, pero de ahí en más no, cuando me presento, bueno, amigos...”*

– ¿Vos no te consideras de izquierda?

*–Yo me considero piquetero...”* (Entrevista del autor a Sombra (22 años), militante de la UTD, Mosconi, Salta, agosto de 2002).

La UTD posee una estructura organizativa completamente informal sostenida fundamentalmente en el liderazgo incondicionado que ejerce su principal referente:

<sup>20</sup> Pese a ello, en mayo de 2002, uno de los principales referentes de la UTD, aceptó incorporarse al gobierno local, avalado por el voto de una asamblea de la UTD, con el cargo de secretario de producción y empleo, con el objetivo de “pelear desde adentro” y lograr la implementación de los proyectos elaborados por la UTD. Sin embargo, en una secretaría sin presupuesto y con problemas de acceso a la información de otras áreas municipales, el margen de maniobra parece ser bastante ajustado, amén del costo político que esta experiencia puede conllevar para el futuro de la UTD. En todo caso, esta integración momentánea al gobierno municipal plantea también otro desafío para ciertos miembros de la UTD: el de recuperar los espacios del Estado.

*“Claro, pero cuando está con los muchachos y empieza a hablar o cuando está con nosotras él llega y le empezamos a preguntar cosas, quizá de su vida, de él, y parece que le encanta eso de que la gente esté ahí escuchándolo, pendientes de lo que él va a decir o va a hacer, por eso acá todos le dicen el líder [...].*

*Él es el líder, para todo el mundo él es el líder, es una persona agradable, tiene también sus cosas, como todos tienen sus días, pero como les digo todo el mundo está atento de lo que le pasa, de lo que le falta, cuando se hacen los cortes, todos están pendientes de dónde está Pepe, él es la cabeza, por eso le preocupa el hecho del levantamiento del corte, porque si él está cansado entonces ¿quién va a luchar ahora?”* (Entrevista del autor a Mary (23 años), miembro de la oficina administrativa de la UTD, Mosconi, Salta, agosto de 2002).

*“Yo creo que la UTD ha sido en el sentido de trabajo y más trabajo, porque el líder piensa así y creo que todos los que lo siguen lo siguen por eso...”* (Entrevista del autor a Cacho (41 años), militante de la UTD, Mosconi, Salta, agosto de 2002).

Como lo mencionamos anteriormente ese liderazgo se afirmó y consolidó gracias a las fuertes disputas que forzaron el alejamiento de los otros miembros fundadores de la UTD. El eje central de esas disputas se relacionó con la relación de la UTD con la política electoral y con su alineamiento o vinculación con otras organizaciones de desocupados del país con incidencia en la política nacional. Así, mientras que uno de los referentes históricos se alejó de la UTD para presentarse como candidato a intendente por el Partido Obrero, otro de ellos fundó la sede local de la Corriente Clasista y Combativa.

Refuerza el liderazgo también la ausencia total de mecanismos representativos o asamblearios que presenta la organización. Efectivamente, no se eligen formalmente delegados y tampoco se realizan periódicamente asambleas para la toma de decisiones. Sin embargo, la división del trabajo, al interior de la organización generó algunas instancias de responsabilidad con un importante margen de autonomía. Así, por ejemplo, el responsable administrativo o quien se hace cargo de las negociaciones políticas tienen un peso diferenciado dentro de la organización. También ocurre lo mismo con varios de los militantes “históricos” –todos ellos de la generación de cuarenta años– de la UTD que suelen reunirse para discutir o cenar al final de la jornada. Por último, los supervisores de los proyectos tienen capacidad de control de las tareas sobre sus subordinados lo que establece un último tipo de diferenciación interna.

Este tipo de dinámica centralizada e informal de funcionamiento permitió –al hacer recaer, en última instancia, toda la responsabilidad en la figura del líder– generar una gran flexibilidad de modo tal que la fuerte rotación de sus militantes y las “entradas y salidas” de algunos en la política partidaria no generen escisiones permanentes que terminarían erosionando definitivamente la organización. Como es previsible, esas entradas y salidas se vinculan centralmente con los períodos electorales en los que las maquinarias de los partidos

locales –UCR, PJ y Partido Renovador– activan la búsqueda de referentes para sumar votos para los distintos sublemas que se disputan la intendencia en cada oportunidad. Las instancias de militancia social –y más aquellas que como la UTD no adhieren formal y unánimemente a ningún partido– se convierten entonces en uno de los ámbitos privilegiados para la caza de referentes<sup>21</sup>.

Al mismo tiempo, lo más curioso de esta experiencia es que se ha construido un vínculo sumamente extraño con el estado municipal. Con la llegada del nuevo intendente (diciembre de 2001), el municipio buscó acercarse tanto a la UTD como a las PYMES, por ver en estos dos sectores (sobre todo en el primero), la garantía misma de su sobrevivencia<sup>22</sup>. La queja mayor de la UTD no solo se refiere al manejo discrecional (mano de obra barata para la militancia o para cumplir las funciones de gobierno) de los planes provinciales y nacionales por parte del municipio, antes de 1999, sino a la negativa recurrente de las anteriores autoridades municipales a suministrar los materiales básicos para la consecución de obras públicas<sup>23</sup>. En fin, en un equilibrio bastante precario el municipio ha cedido en su presión por evitar el desarrollo de las obras y, en cambio, ha mostrado progresivamente una predisposición creciente a facilitar elementos para la continuación de las mismas. Por su lado, la UTD ha mostrado poco empeño en disputar formalmente el poder del gobierno local. A cambio se ha contentado con el mantenimiento de un importante poder de veto sobre las decisiones de gobierno.

Respecto del gobierno provincial, las quejas se repiten sin cesar, no sólo desde las organizaciones de desocupados, sino también desde otros actores sociales. Los pobladores del municipio de General Mosconi y del Departamento de General San Martín consideran que el gobierno provincial desarrolla para con ellos una política de verdadero despojo, una abierta forma de “colonialismo interno” basado en el hecho de que las regalías productos del gas y del petróleo que abonan las empresas al gobierno provincial no son reinvertidas en la región sino que tienen como destino las arcas de los funcionarios de la capital salteña. A decir verdad, la estructuración de un reclamo comunitario hacia la provincia se produjo y se configuró históricamente en estrecho vínculo con el discurso de “reparación histórica” que emergió en los

<sup>21</sup> En el caso de Mosconi, otra instancia privilegiada son las comisiones barriales que son instancias de representación intermedias que fueron organizadas desde el Municipio y que implican la elección periódica de un presidente de barrio. Las comisiones tienen también un cierto capital político pues intervienen en la distribución y gerenciamiento de los planes sociales que administra el Municipio.

<sup>22</sup> Hay que recordar que en los últimos años el municipio fue intervenido dos veces luego de fuertes procesos de movilización que terminaron en uno de los casos (junio de 2001) en la quema del edificio central de la Municipalidad y en un vacío institucional que se prologó cerca de un mes como consecuencia del levantamiento generalizado de la población.

<sup>23</sup> Tal como se detalla más abajo, cerca de la mitad de los proyectos de trabajo ligados a los Planes de Empleo son proyectos de obra pública que, tal como lo establece el formato del Programa Trabajar obligan al Estado a conceder materiales –además del pago mensual de los planes– para la consecución de las obras.

cortes desde 1997 en adelante. Así, la UTD, al igual que otros actores de la zona (sobre todo PYMES), consideran que debe llevarse a cabo una política que compense la doble expoliación que el departamento –el más rico de la provincia en producción de madera, agro, petróleo y gas– sufre tanto a manos de las grandes empresas multinacionales como del gobierno provincial.

La UTD ha tenido un mejor diálogo con el gobierno nacional. Entre 1999 y fines de 2001, la UTD de Mosconi desarrolló fluidos vínculos con la Secretaría Nacional de PYMES con el objeto de aportar “microcréditos” para desarrollar proyectos productivos. A los efectos, se creó una oficina de SEPYMES con sede en Mosconi, que tenía por objeto evaluar la viabilidad de los proyectos productivos presentados. Esta iniciativa se vio diferida por los sucesos de diciembre de 2001, y posteriormente interrumpida en mayo de 2002. Lo anterior generó una honda decepción dentro de los sectores involucrados, algunos de los cuales eran cuadros técnicos de la UTD local.

Resulta curioso que dentro del proceso de politización que se produjo al interior de la UTD desde 1998 hasta aquí es que, por un lado, esa politización no tiene aspiraciones electorales ni institucionales –y en ese sentido no cuestiona tampoco en última instancia la dinámica de la política electoral e institucional– pero, a su vez, existe un ejercicio continuo y profundo de una politicidad descubierta en la capacidad de movilización y, más que eso, en el conflicto potencial que suscitan luego de los años 90 los mecanismos tradicionales de represión y control de la movilización. Esa politicidad es entonces el fruto de un límite impuesto a la posibilidad de ejercer una violencia institucional como mecanismo de resolución de conflictos.

Ese margen, que se fue configurando como consecuencia de las sucesivas puebladas, le ha permitido a la UTD constituirse en un actor de poder claramente en relación con la política local y, en cierta medida y en ciertas circunstancias, en relación con la política provincial y nacional. Pero, ese espacio de legitimidad frente a la comunidad de Mosconi que le permite a la UTD sostener su capacidad de acción y de presión no es únicamente el fruto de la historia del conflicto local sino que se apoya, también, en la visibilidad y reconocimiento que obtuvo el trabajo que desarrolló la UTD a partir del manejo autónomo de los planes asistenciales otorgados por el Estado.

Como lo sostuvimos anteriormente, la organización y la acción colectiva se gestaron por oposición a la categoría *desocupado* que resulta insostenible e inadmisibile para individuos cuya vida se estructuró básicamente a partir de su inclusión en relaciones laborales. Esa categoría lleva implícita toda la carga de frustración que supone no haber tomado las decisiones correctas y no haber tenido capacidad de previsión para evitar el desempleo como resultado de una trayectoria individual. En el caso de Mosconi, esa búsqueda o ese intento colectivo por redefinirse y reinventarse como trabajadores supone, además, otra transformación sumamente costosa: la del pasaje de una cultura de la extracción –tal y como YPF formó a los trabajado-

res de la zona— a una cultura de la producción. De ahí las expectativas que tienen algunos sectores de entablar una alianza estratégica con otros sectores sociales, sobre todo con las PYMES (otro de los ejes para recrear un modelo productivo)<sup>24</sup>. Sin embargo, para dar cuenta de este segundo aspecto, propio del “modelo Mosconi” es necesario describir las actividades y servicios que presta la UTD.

El eje central de organización de la UTD ha sido lograr una combinación de la tarea reivindicativa y de confrontación con una reapropiación y utilización de los planes asistenciales del Estado para el desarrollo de diversas tareas con alto impacto comunitario. En ese sentido, el trabajo en los planes representa sólo una de las cuatro actividades básicas de la UTD. Además de las tareas desarrolladas en cada uno de los proyectos, algunos de sus miembros se dedican a una actividad sistemática y constante de lucha y movilización que ha tenido, históricamente, un rol fundamental en la estructuración y configuración identitaria de la organización de desocupados. Al respecto, cabe recordar que los planes se consiguieron en las rutas pero que, además, se mantienen también por medio de la movilización<sup>25</sup>. Las marchas y los cortes de ruta representan el principal recurso de negociación de que dispone la UTD, sin contar con que algunos de sus miembros se han especializado, como lo mencionamos anteriormente, en la negociación política directa o indirectamente ligada a la movilización. Sin embargo, a lo largo de los años, el reconocimiento comunitario por las tareas desarrolladas —especialmente en lo que se refiere a obra pública— les ha permitido mantener una considerable legitimidad para encarar los procesos de negociación, con menos necesidad de pasar a la acción directa.

La actividad productiva no se sostiene únicamente a partir de los planes de empleo sino también por la capacidad que ha desarrollado la organización para suplir la falta de me-

<sup>24</sup> La imagen del adversario común (las grandes empresas multinacionales) hizo que desde el comienzo, la UTD y la Cámara de Comercio e Industria de General E. Mosconi se constituyeran en aliadas potenciales. Pero fue recién a fines de 2001 que, a raíz de disputas internas, la Cámara de Comercio liderada por un industrial de la zona, sufrió una escisión, dando origen a un Consorcio de Pymes de servicios, considerado como el sector más “propiquetero”. Este consorcio sumaba en su origen 12 empresas conformadas por ex trabajadores de YPF: Dakar services, Re-Val, J.J.S. y asociados, Suministros, Talleres Norte, Aguarague S.A., H&S, S.U.T., Pamser, Sol & Ser, Grúas Mosconi y Transporte Virgen del Peña. La UTD local realizó un largo corte de ruta en enero-febrero del corriente año, con el apoyo de este sector. Más recientemente, ha sido el vehículo para presionar al gobierno provincial, para que limite el llamado de licitación de ciertas obras públicas (la del Hospital Mosconi, por ejemplo) al ámbito estrictamente local, dando prioridad a las pymes locales y a los desocupados del lugar. La relación con las Pymes del lugar, aunque fluida, no ha sido fácil. Al desgaste producido por los sucesivos cortes de ruta y el impacto negativo que esto produce en la actividad de las pymes, hay que sumarle el hecho de que la política de presión, en pos de herramientas y colaboración para llevar adelante a las obras públicas, abarca tanto las grandes empresas como a las Pymes. Esta política de presión es considerada abiertamente extorsiva por algunos, pese a que el conjunto de los actores sociales es consciente de que el trabajo de la UTD se traduce en obras de carácter comunitario.

<sup>25</sup> En el gráfico número 1 del anexo I, puede observarse una progresión de obtención planes trabajar de la localidad de General Mosconi. Como es evidente, esa progresión no es lineal.

dios y materiales para el desenvolvimiento de los proyectos. En este punto, existen dos elementos importantes para ser mencionados: ya hemos dicho que la UTD de Mosconi inauguró un mecanismo sumamente importante de negociación para la obtención de insumos como es el de los cortes de acceso a las empresas; en segundo lugar, las redes surgidas como consecuencia de los cortes multisectoriales y, en términos generales, por las alianzas estratégicas que surgieron a nivel comunitario para encarar los reclamos por el deterioro económico de la región, han dado lugar a un fenómeno muy particular: la UTD lidera redes de actores locales que intentan poner en funcionamiento vías alternativas de desarrollo productivo para la región o al menos para paliar la insostenible situación de parálisis económica.

Junto al trabajo y la lucha, la UTD de Mosconi desarrolla dos actividades que resultan también fundamentales a la hora de comprender la experiencia de administración de planes que lleva adelante. En primer lugar, es necesario mencionar que la UTD ha organizado una *oficina administrativa* que se encarga de la contabilidad y la gestión de recursos, materiales, insumos, mercadería y donaciones que se reciben. Las funciones de empadronamiento de desocupados y control de las contraprestaciones por el pago de los planes han sido el origen de este sector junto con las negociaciones más técnicas, con las distintas instancias gubernamentales, para conseguir el pago efectivo de los montos asignados en los planes. En segundo lugar, la UTD posee una *oficina técnica* encargada de planificar y ejecutar los distintos proyectos. Esta experiencia resulta realmente novedosa y excepcional pues ha permitido modificar exitosamente la lógica de administración de los planes, generalmente utilizados para flexibilizar las condiciones de trabajo en los municipios o, simplemente, para reforzar las prácticas clientelares.

Ambas oficinas son sumamente importantes para comprender el proceso histórico mediante el cual la UTD se ha mantenido al margen de los intentos de cooptación por parte de la política local, provincial y nacional. Esa autonomía se ha sostenido, en parte, gracias a un esfuerzo de resignificación de los planes, desde una instancia asistencial, caritativa y transitoria hacia su consideración como puestos de trabajo conseguidos como conquistas de una lucha. Por otro lado, las instancias administrativa y técnica de la UTD, parecen haber contribuido también a un ensanchamiento de los límites de membresía de la organización; la inclusión de profesionales o jóvenes provenientes de sectores medios empobrecidos parece contribuir a desestigmatizar a la organización y a mejorar su inserción comunitaria.

Al momento de realizar esta investigación la UTD controlaba un poco más de mil planes (entre provinciales y nacionales)<sup>26</sup>. Tener control quiere decir aquí que, en primer lugar,

<sup>26</sup> Cabe señalar que los datos consignados en el gráfico 1 muestran sólo la cantidad de beneficiarios de planes nacionales de la localidad de Mosconi. Por el contrario, los datos de beneficiarios suministrados por la UTD incluyen también a quienes forman parte de los planes provinciales.

los beneficiarios son elegidos de los padrones de desocupados confeccionados por la UTD –y no de los padrones del municipio– y, en segundo lugar, que la propia UTD puede organizar y efectivizar las tareas o actividades que se desarrollan a partir del trabajo en los planes<sup>27</sup>. Esos planes constituyen un recurso organizativo fundamental para la UTD pues, además de la mano de obra, los recursos colectivos de que dispone la organización salen de los aportes que realizan los beneficiarios. Históricamente, la organización reclama dos pesos por beneficiario pero, según diversos testimonios, la recaudación también es informal y, por tanto, dista de ser homogénea y sistemática. Ese fondo común es lo que ha permitido, en estos años, sostener el funcionamiento administrativo así como también –al menos hasta el momento de la devaluación– comprar materiales para el desarrollo de los proyectos. Por diversos motivos, entre ellos la variabilidad en la disponibilidad de planes (ver el gráfico 1 en el anexo I), los recursos han sido y son extremadamente fluctuantes.

Tomando como base la propia estructura de administración propuesta por el Programa Trabajar, la UTD le ha ido dando forma a una serie de proyectos de trabajo en los cuales ha ido integrando a sus miembros (ver anexo II). La mayor parte de los sesenta y cinco proyectos que administraba la UTD de Mosconi al momento de realizar el relevamiento, se vinculan con tareas que podrían definirse como obra pública (ver gráfico 2). Entre ellos los principales son de construcción o refacción de escuelas, erradicación de ranchos y letrinas, espacios recreativos, desmalezamiento y limpieza de espacios públicos. La importancia en el peso relativo de este tipo de proyectos tiene que ver con el hecho de ser mano de obra intensiva y que, además, tienen un fuerte impacto comunitario, lo cual ha permitido, como dijimos, reforzar el compromiso de la organización con el espacio local.

En segundo lugar, un porcentaje importante de proyectos pueden ubicarse como productivos dentro de una categoría general. Esto quiere decir que se orientan a generar algún tipo de valor agregado o producto eventualmente comercializable. Hasta el momento la experiencia más exitosa resulta ser la creación –en tierras fiscales o concesionadas– de huertas comunitarias. Pese al problema de escasez de agua que limita el desarrollo productivo de la región, cada una de las veinte huertas que funciona en la localidad emplea unas diez personas, en su mayoría mujeres. La producción de dichas huertas provee a los comedores municipales y ocasionalmente al hospital local. Desde agosto de 2002, la UTD viene ensayando la realización de una Expoferia dos veces por semana en la plaza central de Gral. Mosconi.

Dentro de esta serie de proyectos productivos resulta fundamental mencionar el desarrollo de fábricas de ladrillos que abastecen los trabajos de obra pública. Las cuatro ladrilleras

<sup>27</sup> Hay que recordar que los planes trabajar exigen el desarrollo de proyectos colectivos para la atribución de los planes. Esto quiere decir que, al menos formalmente, las tareas están asignadas antes que la contraprestación del plan se haga efectiva. En el caso del nuevo Plan Jefes y Jefas de Hogar o de algunos planes provinciales la discrecionalidad en la definición y control de las tareas es más importante.

que se encuentran en funcionamiento han permitido crear un pequeño circuito de generación de insumos que contribuye a alimentar las obras y a resolver, en parte, el problema de la falta de materiales<sup>28</sup>.

La obsesión de sus dirigentes es lograr “trabajo genuino” y de manera más amplia, el desarrollo integral de la región. En suma, la UTD de Mosconi viene realizando un esfuerzo tendiente a transformar los planes de asistencia social en programas productivos. De ello da cuenta los diferentes proyectos que han presentado ante autoridades locales y nacionales enmarcado en un plan de regulación de la zona que incluye la instalación de un Colegio Universitario, un polo petroquímico y la renovación del aeropuerto de Mosconi y el Hospital de la misma localidad, entre otros. Por ejemplo, en términos de obras públicas, luego de desarrollar una política de presión sobre las distintas instancias de responsabilidad estatal, la UTD logró que se reanudaran las obras públicas para finalizar el Hospital Mosconi, que éstas fueran otorgadas a una PYME del lugar (Talleres Norte) y que estos últimos emplearan desocupados de la zona para la realización de las tareas.

Más importante aún que los proyectos o las tareas puntuales, resulta el hecho de que la UTD ha logrado modificar, en parte, la dinámica y la inercia de la crisis local. Esa transformación se visualiza en una distancia cada vez menor entre, por un lado, el reclamo común y generalizado de reparación histórica por las consecuencias de la retirada del Estado y, por el otro, las negociaciones ligadas a la dinámica de movilización de la organización.

#### ***IV. Conclusiones: ¿Existen nuevos horizontes?***

En un contexto de crisis comunitaria como el que hemos descrito y analizado, la política asistencial –elaborada e implementada para dar respuesta a la movilización– condujo, en primer término, al desarrollo de *relaciones fuertemente competitivas* dentro de la comunidad estudiada<sup>29</sup>. En este sentido, presentamos detalladamente los distintos escenarios de los cortes de ruta en los cuales se fueron produciendo sucesivas negociaciones, confrontaciones y acuerdos en relación con los recursos o concesiones que la provincia o la nación fueron asignando.

<sup>28</sup> Más allá de los proyectos en funcionamiento ligados a los planes, encontramos en nuestro relevamiento algunos emprendimientos más ambiciosos cuya viabilidad no era todavía demasiado clara. Por ejemplo, una carpintería que fabrica aberturas (puertas y ventanas), que forma parte de un intercambio que se realiza con los trabajadores de la Cerámica Zanón. También hay que considerar que se ha desarrollado un proyecto de compactación y venta de plásticos lo cual podría representar junto con la Expoferia, antes mencionada, los primeros pasos en la generación de fondos propios achicando ligeramente la dependencia que la organización tiene de los planes de empleo.

<sup>29</sup> Para una tipología de relaciones sociales ligadas a la implementación de políticas sociales en América Latina ver Roberts (2001).

Nuestro caso es singular pues, para entender la implementación de las políticas sociales, no puede partirse de una instancia de planificación sino que es necesario considerar que han sido respuestas desarrolladas por los estados para afrontar situaciones críticas. En este sentido, el Programa Trabajar, más que un programa de empleo o reconversión laboral operó como un subsidio o seguro de desempleo. Históricamente, el volumen del subsidio fue negociado en contextos de alta movilización social motivo por el cual las instancias de planificación debieron ser ajustadas o simplemente dejadas de lado en virtud de las circunstancias.

En su esquema original, los planes trabajar parecen haber funcionado como recursos flexibles para hacer frente a situaciones de emergencia facilitando a su vez un refuerzo para los gobiernos municipales agobiados por la crisis fiscal de las provincias. Así, en la medida en que el municipio controlaba la distribución de planes, podía incrementar sus dotaciones de personal o de militancia, al tiempo que atendía situaciones de extrema necesidad. Este modelo permitió, en cierta medida, una buena articulación con las lógicas de funcionamiento de la política local.

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, diversos actores comunitarios movilizados han provocado una confrontación con la lógica primaria de implementación del plan y han desencadenado escenarios de competencia y procesos de resignificación y de apropiación de las políticas. Entre esos actores, nos hemos concentrado en la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi pues es la que mejor permite mostrar el sentido de esos nuevos escenarios y procesos.

Como se trata de una organización de desocupados, resultó necesario articular el análisis del caso con un estudio particular de las formas de identificación de los militantes de la UTD que surgen de las reflexiones que presentan los individuos entrevistados, especialmente en relación con la manera en que narran su propia historia de participación en los conflictos y en la militancia social. Ese análisis que pondera la productividad de las categorías de *desocupado*, *piquetero*, *miembro de la comunidad de Mosconi*, *trabajador* y *peronista* constituye junto a la caracterización más general de la organización y de la comunidad, un elemento clave para la comprensión de las formas de reapropiación de las políticas. Este punto reviste una importancia particular pues, como dijimos al principio, los estudios sociológicos clásicos y contemporáneos sostienen que los desocupados son “irrepresentables” y que, por ende, no pueden producir organizaciones políticas.

Esos estudios no se equivocan al señalar que la categoría desocupado no constituye un criterio de identificación aceptable para los sujetos en cuestión, al tiempo que su situación es proclive a un nuevo tipo de individualismo que tiende al aislamiento. Por ello, hemos intentado mostrar que resulta fundamental el análisis de la configuración de una nueva identidad colectiva en el espacio que define la convergencia de diversos procesos de identificación en tensión. Como hemos visto, confluye allí tanto la expectativa de una reinserción en las relacio-

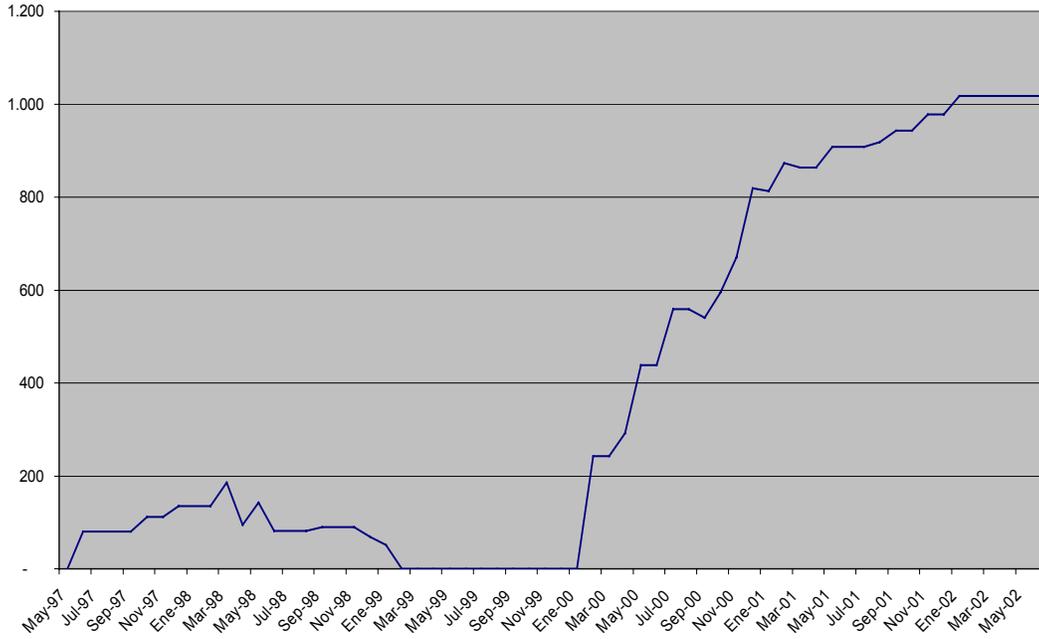
nes salariales (*trabajador*) como una resignificación de los lazos comunitarios (*habitante de Mosconi*) así como la narración de la historia del propio conflicto (*piquetero*).

A partir de ese marco general, desarrollamos luego lo que constituye el eje central de este estudio, a saber: En primer lugar, una reconstrucción de la historia de la constitución y desarrollo de la UTD como un actor social con capacidad de intervención política tanto a nivel local, como provincial e incluso nacional. Esa historia da cuenta del tipo particular de relación que la UTD fue estableciendo con los diversos actores con los que confrontó e interactuó históricamente, es decir, con los estados municipal, provincial y nacional, con los partidos políticos, con los pequeños empresarios de la zona, con las empresas petroleras y con otros sectores de la comunidad de Mosconi como ser docentes y empleados estatales. En la somera descripción de esas relaciones hemos tratado de hacer hincapié en los elementos que permiten comprender el surgimiento de una capacidad de acción política por parte de la UTD, la cual –como dijimos anteriormente– ha permitido crear un círculo virtuoso de reconocimiento y legitimación que posicionó a la UTD en situación de poder diversificar sus formas de acción: de la pura contestación al desarrollo de incipientes modos de producción y gestión del trabajo sostenidos en una administración no mediada de los planes asistenciales adquiridos en los cortes de ruta. En esa articulación entre movilización y desarrollo de tareas productivas y de obra pública se encuentra la riqueza y la particularidad de esta experiencia.

Sin embargo, la altísima conflictividad que rodea la implementación y reapropiación de los planes de empleo está relacionada con la brecha abierta por la ausencia de horizontes comunitarios claros. Como lo mencionamos anteriormente, la privatización de YPF no sólo produjo un aumento de la tasa de desempleo sino que desembocó en el colapso de las economías locales y en fuertes procesos de desestructuración social que terminaron por borrar el horizonte de expectativas de comunidades enteras. En el caso analizado, esa crisis tuvo su correlato en la formulación de un discurso de reparación histórica que emergió en los primeros cortes motorizados por multisectoriales. En la búsqueda de nuevos horizontes de expectativa, el reconocimiento de un mismo destino compartido ha sido de una importancia invaluable; sin embargo, no representa más que un comienzo. Por otro lado, los planes sociales aun cuando permiten atender un aspecto puntual y dramático de la crisis (la imposibilidad de obtener ingresos mediante el trabajo) están lejos de ser un mecanismo eficaz para habilitar la recreación de un horizonte de expectativas para la comunidad.

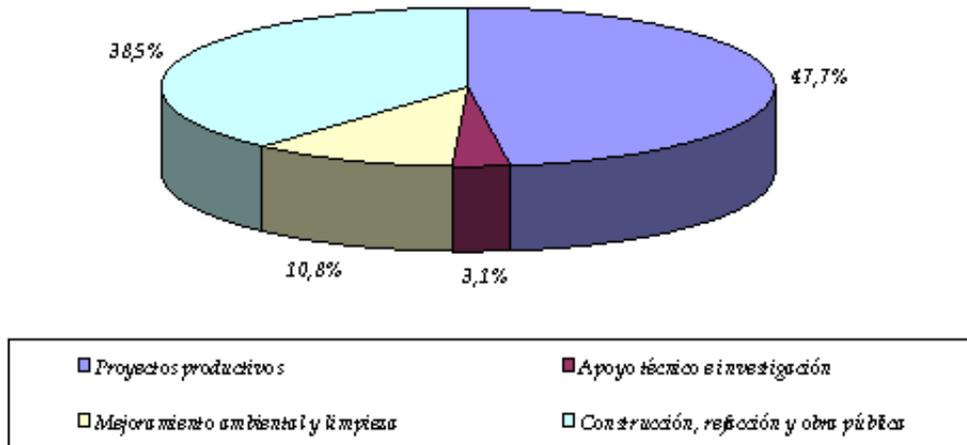
**ANEXO I**

**GRÁFICO 1: Cantidad mensual de beneficiarios activos del Programa Trabajar General E. Mosconi, mayo 1997 / junio 2002**



Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

**GRÁFICO 2: Tipología de proyectos de trabajo desarrollados por la UTD-Mosconi, agosto 2002**



Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi.

**ANEXO II****Listado de proyectos de trabajo desarrollados por la UTD-Mosconi (agosto 2002)**

<b>Proyectos UTD-Mosconi</b>	
Huertas comunitarias	20
Proyecto CIDAI	1
Salón de usos múltiples	2
Refacción de escuelas	5
Erradicación de letrinas	3
Cerco perimetral	1
Lugar recreativo	2
Ladrillera	4
Refacciones en zona industrial	1
Construcción comedor	1
Construcción aula taller	1
Erradicación de ranchos	3
Construcción tapiado cementerio	1
Apoyo técnico	1
Granja mixta	3
Vivero	2
Mejoramiento ambiental	4
Limpieza ejido municipal	1
Forestación	2
Desmonte y mantenimiento	1
Limpieza y mantenimiento canal	1
Apertura camino secundario	1
Refacción lugar recreativo	1
Construcción de aulas	2
Construcción santuario	1
<b>Total</b>	<b>65</b>
<b>Total de beneficiarios</b>	<b>1.028</b>
Promedio de beneficiarios por proyecto	16

**BIBLIOGRAFIA**

- AAVV: *Unidad en la diversidad: estudios laborales en los 90*, Eudeba, Buenos Aires (2002).
- ANDRENACCI, L., NEUFELD, M., y RAGGIO, L. (coords.) (2001): "Elementos para un análisis de programas sociales desde la perspectiva de los receptores", ICO, UNGS.
- ARONSKIND, R. C. (2001): *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en los '90*. Libros del Rojas, Buenos Aires.
- AUYERO, J. (2002): *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Libros del Rojas, Buenos Aires.
- BARATTINI, M. (2002): "Los programas de emergencia ocupacional: las organizaciones de desocupados y el Estado, una relación conflictiva". Universidad Nacional de General Sarmiento (tesis de licenciatura).
- BASUALDO, E. M. (2002): *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*. Universidad de Quilmes, Buenos Aires.
- BECCARIA, L., y LOPEZ, N. (comp.) (1996): *Sin trabajo*. UNICEF/Losada, Buenos Aires.
- BERACOCHEA, R. E. (1998): "Empresas locales de servicios petroleros (problemática)". Documento de la Cámara de Comercio e Industria de General Enrique Mosconi, mimeo, Salta.
- CASTEL, R. (2001): *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*. Folio-Gallimard, Paris.
- ESQUERRO, Laura, GALIANI, Sebastián, STURZENEGGER, Federico, y STURZENEGGER, Germán (2002): "La privatización de YPF, mitos y realidades", mimeo, Buenos Aires.
- FARINETTI, M. (1999): "¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina", en *Trabajo y Sociedad*, N° 1.
- GERCHUNOFF, P., y TORRE, J. C. (1996): "La política de liberalización económica en la administración de Menem", en *Desarrollo Económico*, N° 143.
- GIARRACA, N., y colaboradores (2001): *La Protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Alianza. Madrid.
- JELIN, E. (1994): "¿Ciudadanía emergente o exclusión? Movimientos sociales y ONG en los años noventa", en *Revista Mexicana de Sociología*, Año LVI, N° 4, octubre-diciembre.
- KESSLER, G. (1996): "Algunas implicancias de la experiencia de desocupación para el individuo y su familia", en BECCARIA y LOPEZ (comp.): *Sin trabajo*, UNICEF/Losada, Buenos Aires.
- LAPEGNA, P. (2001): "Actores heterogéneos y nuevas formas de protesta: los cortes de ruta en Tartagal-General Mosconi, Salta. Informe final beca UBACyT estímulo, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- LECARO, P., y ALTSCHULER, B. (2002): "Políticas sociales y desarrollo local. Dos experiencias diversas: Club del Trueque y Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi", en *Congreso de Políticas sociales. Estrategias de articulación de políticas, programas y proyectos sociales en Argentina*", Universidad de Quilmes, Bernal.

- LONG, N. (1999): "The Multiple Optic of Interface Analysis (working title)". UNESCO Background Paper on Interface Analysis, mimeo.
- MARTUCCELLI, D., y SVAMPA, M. (1997): *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*. Losada, Buenos Aires.
- MERKLEN, D. (2003): "Entre ciel et terre: Les sciences sociales et la mobilisation populaire en Argentine", en *Cahiers des Amériques Latines*, IHEAL-Paris III, Paris.
- MERLINSKY, G. (2000): "El empleo como cuestión social: un marco general para analizar los programas de generación de empleo", Buenos Aires, Jornadas de discusión: "Cuestión Social y Política Social en el Gran Buenos Aires", ICO-UNGS.
- NEUMAN, M. (2001): "Proyecto de capacitación y consultoría de la Universidad Nacional de General Sarmiento a PYMES proveedoras de Repsol-YPF. La formación de ex trabajadores estatales para ser empresarios", en *Boletín Informativo Techint 305*, Buenos Aires.
- OVIEDO, L. (2001): *Una historia del movimiento piquetero*. Buenos Aires, Ed. Rumbos.
- ROBERTS, B. R. (2001): "The New Social Policies in Latin America and the Development of Citizenship: an Interface Perspective", Paper for Workshop on Agency, Knowledge and Power: New Directions, Wageningen (14 th -15 th diciembre)
- ROFMAN, A. (1999): *Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del carbón y del azúcar*. Planeta, Buenos Aires.
- ROSANVALLON, P. (1995): *La nouvelle question sociale. Repenser l'État-providence*. Senil, Paris.
- SCHUSTER, F., y PEREYRA, S. (2001): "La protesta social en la Argentina democrática. Balance y perspectivas de una forma de acción política", en N. GIARRACA y colaboradores: *La Protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Alianza, Madrid.
- SCRIBANO, A. (1999): "Argentina 'cortada': cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste", en LOPEZ MAYA, M. (ed.): *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste*. Nueva Sociedad, Caracas.
- SIDICARO, R. (2002): *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-1955/1973-1976/1989-1999*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- SOLBERG, C. E. (1986): *Petróleo y nacionalismo en la Argentina*. Hyspamérica, Buenos Aires.
- SOLDANO, D. (1997): "Prácticas sociopolíticas y cambios identitarios en contextos de exclusión: una investigación", Universidad de Buenos Aires, mimeo, Buenos Aires.
- SVAMPA, M. (2002): "Las dimensiones de las nuevas movilizaciones sociales", en *El Rodaballo*, año VIII, Nº 14.
- SVAMPA, M., y PEREYRA, S. (2003): *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Biblos, Buenos Aires.
- WOOD, M. (1998): "Redes clientelares en el conurbano bonaerense: usos del espacio y formas de estructuración del poder local", III Jornadas Internacionales Estado y Sociedad: la reconstrucción de la esfera pública, CEA-UBA.

# Cuadernos de CLASPO - Argentina

## Títulos publicados:

- Nº 1. KARINA BIDASECA: «Vivir bajo dos pieles... En torno a la resignificación de las políticas sociales y la complejización del vínculo con el Estado. El Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano».
- Nº 2. ALEJANDRA COSOVSKI: «Las prácticas participativas en salud. El caso de los Municipios Saludables: el Municipio de General Rodríguez».
- Nº 3. CARLA MURIEL DEL CUETO: «Desde el barrio. Un estudio sobre acción cultural en dos barrios del Gran Buenos Aires».
- Nº 4. FABIANA LEONI Y MARIANA LUZZI: «Rasguñando la lona. La experiencia de un club de trueque en el conurbano bonaerense».
- Nº 5. MABEL LÓPEZ OLIVA: «Violencia familiar en la Ciudad de Buenos Aires: Un estudio sobre la dinámica de relación entre organizaciones no gubernamentales, poder judicial y otros servicios estatales frente a las denuncias judiciales».
- Nº 6. LAURA MARTÍNEZ PORTA: «La Universidad como agente de desarrollo local».
- Nº 7. PEDRO NÚÑEZ: «(Des)igualdad, necesidades y legitimidad. Un acercamiento a los criterios de justicia en sectores populares».
- Nº 8. GABRIELA POLISCHER: «Paradojas del asistencialismo: Una mirada a partir del caso de un comedor comunitario».
- Nº 9. GABRIELA WYCZYKIER: «Las estrategias de las organizaciones de la sociedad civil frente a los problemas de empleo: Un estudio de casos a partir de la articulación de niveles de acción micro-macro».
- Nº 10. NINA ZAMBERLIN: «Las organizaciones de la sociedad civil en el campo de la salud sexual y reproductiva. Estudio de caso: el Centro de Promoción del Joven».
- Nº 11. HUGO DANIEL ÁLVAREZ: «Mejoramiento habitacional y desarrollo de capacidades en un barrio del Conurbano Bonaerense. Estudio de caso».
- Nº 12. PABLO BONALDI: «Análisis de la implementación del Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios».
- Nº 13. OLGA G. BRUNATTI: «La asistencia a la víctima de "violencia familiar": tres instituciones sociales no gubernamentales y un ámbito especializado de la esfera jurídica abordando un mismo problema social».
- Nº 14. SERGIO CAGGIANO: «"Hacer presente a Bolivia". Centro de Estudiantes y Residentes Bolivianos, red institucional e "interconexiones"».
- Nº 15. DAMIÁN GUSTAVO CORRAL: «Inseguridades, incertidumbres y modos de regulación en los sectores populares. Un abordaje sobre las representaciones sociales y lógicas de acción en un barrio del conurbano bonaerense».
- Nº 16. SEBASTIÁN ESSAYAG: «La participación ciudadana como estrategia de fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud: un estudio de caso».
- Nº 17. LUIS FARA: «Estudio de caso: Cooperativa de Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Monseñor Angelelli Ltda.».
- Nº 18. ALICIA GONZÁLEZ ANDRADA: «Planificación estratégica participativa: Tensiones y conflictos en la lógica de inclusión social en la Ciudad de Buenos Aires».
- Nº 19. SEBASTIÁN PEREYRA: «¿De las acciones de lucha a los proyectos productivos? La experiencia de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi en Salta».
- Nº 20. MARÍA LAURA RAFFO: «Ciudadanías en construcción. Un estudio sobre organizaciones de travestis en la Ciudad de Buenos Aires».
- Nº 21. FERNANDO SANTIAGO Y MARINA GARCÍA: «La articulación de actores en el desempeño de las políticas sociales. Estudio de caso: la comunidad de Barrufaldi en el Conurbano Bonaerense».
- Nº 22. CRISTINA B. TORRES: «La participación en las políticas sociales: el papel de los Consejos Consultivos. Los espacios de articulación multiactorales en la gestión de las políticas públicas locales. El Consejo Local Económico Social de Esteban Echeverría. Un estudio de caso».